

Colección Política, Políticas y Sociedad
Serie Democracias en revolución & revoluciones en democracia

Economía y hegemonía

Argentina, 2000-2015

José Luis Coraggio y Pablo Míguez
Compiladores

EDICIONES UNGS



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Economía y hegemonía

Argentina, 2000-2015

Economía y hegemonía

Argentina, 2000-2015

José Luis Coraggio y Pablo Míguez
Compiladores

Alberto Bonnet, Alejandro Gaggero, Pablo Míguez,
Adrián Piva, Fernando Porta y Martín Schoor

EDICIONES **UNGS**



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

Economía y hegemonía : Argentina, 2000-2015 / Alberto Bonnet... [et al.] ; compilado por José Luis Coraggio ; Pablo Míguez.-
1a ed.- Los Polvorines : Universidad Nacional de General Sarmiento, 2020.
76 p. ; 21 x 15 cm. - (Política, políticas y sociedad. Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia ; 4)

ISBN 978-987-630-446-7

1. Economía Argentina. 2. Hegemonía. I. Bonnet, Alberto. II. Coraggio, José Luis, comp. III. Míguez, Pablo, comp.
CDD 330.82

EDICIONES **UNGS**

© Universidad Nacional de General Sarmiento, 2020
J. M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines (B1613GSX), Prov. de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4469-7507 - ediciones@campus.ungs.edu.ar - ediciones.ungs.edu.ar

Serie Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia

Coordinación: José Luis Coraggio y Eduardo Rinesi
Comité Académico: W. Pengue, F. Acosta, R. Aronskind, G. Vommaro y J. P. Cremonte

Diseño gráfico de interiores: Daniel Vidable

Tipografías:

Rosario / Diseñada por Héctor Gatti, Adobe Typekit & Omnibus-Type Team

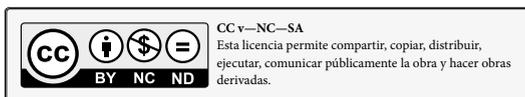
Andada / Diseñada por Carolina Giovagnoli para Huerta Tipográfica

SIL Open Font License, 1.1

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Derechos reservados.



Índice

Introducción 9

PRIMERA PARTE

Cambio estructural y antagonismo social en la Argentina reciente

El kirchnerismo. Los límites de una política de desplazamiento del antagonismo social 23
Adrián Piva

Los gobiernos kirchneristas: entre la holgura y la restricción externa. Una mirada estructural 33
Martín Schoor

Estructura y distribución: un conflicto no resuelto 39
Fernando Porta

SEGUNDA PARTE

Grupos económicos, fracciones del capital y dominación en la Argentina contemporánea

El kirchnerismo y la ambivalencia de una reindustrialización fallida..... 51
Pablo Míguez

La élite empresarial durante el kirchnerismo 61
Alejandro Gaggero

Acumulación y dominación en la Argentina reciente 69
Alberto Bonnet

Introducción

Este libro es el resultado de la Jornada “Economía & Hegemonía. El proceso económico Argentino 2000-2015” realizada el 4 de noviembre de 2016 en la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) en el marco del proyecto latinoamericano “Democracias en revolución, revoluciones en democracia”, que contó con la presentación de numerosos economistas y politólogos destacados de nuestro medio en un debate abierto a la comunidad universitaria y al público en general.

El proyecto regional “Democracias en revolución, revoluciones en democracia” se plantea sobre la base de una hipótesis: hay una determinación no externa entre economía y política. No podemos entender el proceso económico si no entendemos otras dimensiones de los procesos sociales, en particular, la política. La relación entre economía y política bajo instituciones democráticas tiene que ser investigada desde la perspectiva de la confrontación entre proyectos y fuerzas que pugnan por establecer un orden hegemónico. Viabilizar un determinado proyecto de sociedad, constituir un bloque social, supone una articulación contingente en una sociedad en la que hay una alta fragmentación y vulnerabilidad, heredada del período neoliberal anterior.

La economía ortodoxa señala que el problema económico es encontrar el procedimiento formal de asignación de recursos escasos para fines múltiples y alternativos, siendo el mercado la única institución que resuelve por sí misma este problema de la manera más racional. La economía es

una economía *de* mercado, más o menos perfecta. Por su parte, la economía social, como parte de la corriente polanyiana de economía sustantiva, define la economía como un sistema plural de instituciones, de principios, de valores y de prácticas que se da una sociedad en cada momento histórico para organizar la producción, la distribución, la circulación y el consumo, con el sentido de reproducir y desarrollar la vida de los miembros de esa sociedad en equilibrio con la naturaleza. Esta definición, obviamente, tiene incluido un principio ético, y por supuesto, no coincidimos con que la ética no tiene nada que ver con la economía.

Desde el inicio se acordó encarar este eje del proyecto regional con la perspectiva de la economía social. Esto requiere un poco de explicación porque el concepto de economía social es polisémico y han habido interpretaciones, e incluso se ha instalado en la Argentina la idea de que es una política social que tiene como sentido lograr el trabajo autogestionado de personas excluidas del mercado. Algo similar ha ocurrido, por ejemplo, en Ecuador y Brasil, aunque con otros nombres: economía popular y solidaria, economía solidaria. No es ese el sentido que queremos darle aquí, sino uno más amplio.

El sentido entonces es la reproducción de la vida y desde la racionalidad reproductiva es que evaluamos estos procesos y las propuestas y las políticas que se han implementado. Esta idea implica que hay otros principios de organización de la economía que no se reducen al principio de mercado y que están presentes en toda economía, solo que la economía ortodoxa los oculta o los ve como parte de una actividad desviada, no objetiva (y por tanto, no objeto de investigaciones científicas), sino orientada por valores subjetivos. Tenemos el principio de *redistribución*, que evidentemente está muy presente en estos procesos; el principio de *reciprocidad* entre los participantes, como por ejemplo, en el caso de la estatización del sistema de seguridad social, en el que hay una relación de reciprocidad (con la obligación que establece el Estado, pero el sistema es de reciprocidad). Hay un principio de *comercio*, dentro del cual planteamos la posibilidad de intercambios administrados, y en particular, del comercio justo. No se trata de un *sistema libre de mercados* que a través de un juego objetivante entre ofertas y demandas determina de manera mecánica las relaciones de intercambio. Existe a su vez un principio de *autarquía*, es decir, la “economía del hogar”, que implica tener en cuenta la producción para el propio consumo (que por lo general no se considera como parte de la producción de riqueza y que genera valores de uso fundamentales, sin los cuales la economía no podría funcionar).

Y también agregamos el principio de *restitución de la biodiversidad*, que es fundamental si pensamos a la economía intergeneracionalmente.

Todos estos principios tienen mucho que ver con la solidaridad, por lo que a veces también se llama economía social y solidaria. Al proyecto de construcción de un sistema económico regulado por la versión progresista de una combinación jerarquizada de esos principios como parte de las transformaciones, impulsadas por la política, de un sistema económico orientado por el objetivo de sustentar una sociedad más justa. Sus criterios de eficiencia tienen como eje la reproducción de la vida y no la del capital. Procurar la mejor sociedad posible implica la rejerarquización de estos principios, evitando que el principio de libre mercado sea el dominante y el que jerarquiza a todos los otros. Entonces, la transformación que esperamos de los procesos que estudiamos es resultado de una pugna por privilegiar en la economía unos principios u otros. Esto no quiere decir que la economía de mercado no sea algo que tenemos que estudiar y entender, y que además es central en estas sociedades. Tampoco se niega que las restricciones macroeconómicas le ponen límites a la acción de los gobiernos y a los proyectos políticos que se plantean. A la vez, estamos afirmando que los comportamientos económicos no se explican, como se suele suponer, por la pura orientación del interés material, sino que hay valores, hay luchas culturales que tienen que ver con lo étnico, con el género, con los derechos humanos, con valores como la soberanía y la libertad, que no pueden ser captados por las teorías del mercado y su *homo economicus* y que, sin embargo, inciden en el comportamiento y en las acciones de los actores sociales –particularmente del Estado– en el campo de fuerzas que constituye la economía.

Hoy es inevitable estudiar en profundidad el mercado real, porque el mercado global penetra en nuestras economías y siempre ha sido, aunque ahora se acentúa, un proyecto civilizador, entendido como un proyecto de mercantilización de todas las actividades de la vida humana en aras de ese concepto llamado “competitividad”. Una competitividad que está planteada desde el punto de vista de una determinada división social del trabajo, en nombre de una supuesta “eficiencia”, que supone consolidar la primarización de nuestros países y dejar de lado los procesos de industrialización, ya sea por la sustitución de importaciones o por otras vías. Además, esta competitividad se basa –y se supone que puede fundamentarse– moralmente, en la degradación de las fuerzas de trabajo y los derechos de los trabajadores, y en la expoliación de la naturaleza. Desde ese punto de vista,

además, sostenemos la posición de que no hay una ley histórica que conduzca de modo inexorable a una economía de mercado global, sino que incluso estos avances para reinstaurar o instaurar con más fuerza el mercado son construcciones políticas, parte de un programa civilizatorio.

Este programa civilizatorio, que implica la mercantilización de todas las esferas de la vida, tiene por supuesto una dimensión simbólica, pues penetra en la subjetividad de los miembros de estas sociedades y busca homogeneizar socialmente y generar un sentido común legitimador de este sistema de mercado, de esta economía naturalizada planteada por el proyecto neoconservador, cuya utopía de autorregulación pretende liberarla de toda intervención colectiva, social o política. Por el contrario, el enfoque teórico y práctico propuesto desemboca necesariamente en la repolitización de la economía misma, no de manera exógena, suponiendo que economía y política existen como dos esferas separadas, sino como sistema de confrontación por la hegemonía, es decir, por el control cultural y no solo material en el interior del entramado multidimensional que hemos definido como “economía social”, en cuyo proceso se van definiendo actores colectivos cambiantes y sus diferencias.

Sin embargo, es un sistema contradictorio que no se determina mecánicamente por el mero funcionamiento de la economía, determinando el imaginario y los valores de los miembros de la sociedad. Por lo tanto, para poder funcionar necesita un trabajo específico de generación de otro sentido, un trabajo sobre los aspectos simbólicos. Ahí los medios de comunicación son fundamentales, no los podemos ver por fuera de la economía, por fuera de la lucha por la hegemonía. No solo porque tienen una dimensión empresarial capitalista, sino también por el impacto que tienen sus producciones simbólicas sobre los comportamientos, sobre la visión de la economía de la sociedad en su conjunto. Damos un peso importante al tema de la subjetividad, cuestionando esa hipótesis de que el “interés” es el motivador fundamental de los comportamientos y además planteamos que las economías son construcciones históricas porque existen –y han existido siempre– sujetos colectivos con la voluntad y la capacidad política para esa transformación. Si la economía es una construcción política, hacen falta sujetos políticos, hace falta una voluntad política para esa transformación, que no es un proceso natural o un proceso sin sujeto.

La conformación de esa subjetividad es para nosotros una parte constitutiva de los procesos económicos. Se trata de una subjetividad compleja que está determinada históricamente, que da a lugar a acciones complejas

y a nuevas prácticas. La transformación de esa subjetividad está asociada a la posibilidad de nuevas prácticas en lo político y en lo económico. Aquí juega un papel importante el estilo del ejercicio del poder en estos procesos como, por ejemplo, la reiterada formación de una relación líder-masa y una cultura política que tiene efectos sobre las visiones de la economía. En la propuesta ética que planteamos es fundamental establecer si, en su conjunto, estos rasgos se van a sostener, o si esta relación líder-masa es una etapa para poner en marcha estos procesos, pero avanzando en la constitución de sujetos políticos y sociales autónomos, una sociedad civil con capacidad de reconocer su propia diversidad y de articularse como pueblo a pesar de todas sus contradicciones. Si esto no se logra, se convierte en una restricción política para poder sostener estos procesos que son fácilmente reversibles en situaciones como la pérdida de una elección. La transformación (desde las reformas fuertes a las revoluciones) debe ser sustantiva no solo en los principios económicos, sino también en los propios de la democracia. Nada de lo dicho pretende que esa multidimensionalidad reste relevancia a lo usualmente entendido como “económico”, incluso desde una visión crítica. Por ejemplo, pensamos que la economía política crítica, siendo una de las principales contribuciones históricas a la comprensión del sistema capitalista, está muy concentrada en la mecánica del proceso de acumulación de capital, el papel del Estado y las llamadas “correlaciones de fuerza”.

El régimen político, sin duda constituido en parte por comportamientos “racionales”, de cálculo actual o previsto de intereses particulares, da lugar también a comportamientos de masa, comportamientos basados en el contagio, en la manipulación de lo simbólico, en la imitación, en afectos y visiones del mundo. Y no es posible dejar esto afuera para explicar, por ejemplo, los resultados de las elecciones. Las explicaciones de estos procesos complejos no pueden reducirse a la evolución final de la situación económica objetiva y sus consecuencias sobre los ciudadanos de los distintos sectores. Sobre esto afirmamos que la legitimidad o ilegitimidad de un gobierno no puede fundarse exclusivamente en los resultados de sus políticas económicas, que no hay un determinismo económico, mediado o no por el Estado, que hay políticas que tienen que ver con lo simbólico, y no solo eso. Políticas de derechos humanos, políticas que afirman la identidad nacional, la lucha contra el colonialismo y el patriarcado, el logro de una certidumbre de confianza y de afecto por los dirigentes. Todo eso tiene que ver, por ejemplo, con la efectiva posibilidad de que los gobiernos

implementen –por necesidad o por error– determinadas políticas económicas que incluso pueden perjudicar a los sectores del bloque hegemonizado o del bloque social que los sustenta.

Por otro lado, tenemos que analizar el “discurso”, es decir, la construcción de los significados alrededor de los procesos económicos. Los efectos subjetivos de las políticas económicas que, aun siendo de orientación popular, se definan e implementen verticalmente o que, por el contrario, lo sean con métodos que convoquen a la formación de sujetos colectivos. Desde esta perspectiva, es fundamental analizar la forma en que el bloque hegemónico, o con pretensión hegemónica al menos, se relaciona con los sujetos hegemonizados. En particular, en lo que hace a los trabajadores en sentido amplio, es necesaria la constitución de una base material de estos sujetos –potenciales o reales– que no se puede resolver con la organización de una economía mixta, en la que el sector público y el sector privado, capitalista, aparecen como los dos verdaderos generadores de producción, de empleo e ingreso. Por el contrario, hace falta reconocer y promover formas económicas alternativas como las propuestas por las empresas recuperadas, por el cooperativismo, el mutualismo, las comunidades indígenas (muy significativas en los países andinos), otras instituciones, otras formas de organizar la economía. Estas son fundamentales para generar un sector de la economía que tiene un peso importante, no reconocido, que es el sector de una economía popular, que tiene una parte solidaria variable según la sociedad o su momento histórico. Pero eso no es todo. Esta economía popular no es solo la del “sector informal”, como se la suele ver, sino una economía de los trabajadores, en la que la estrategia de realización de sus capacidades de trabajo, combinando la venta de trabajo asalariado, la producción y venta de bienes y servicios por cuenta propia, y la producción doméstica para el autoconsumo, es una condición para sostener o transformar la economía y su dinámica. Por tanto, debe ser reconocida e investigada en su compleja unidad en la diversidad, para entender la realidad no solo de esta economía popular, sino también del sistema en su conjunto. Por ejemplo, los ciclos de la economía “formal” encuentran respuestas, al menos adaptativas, en la economía popular, pro o contracíclicas, que han sido registradas parcialmente por las referencias al “sector informal”. Además, cuando se trata a la economía popular como sumatoria de individuos con una posición en cada coyuntura del sistema económico, no se tiene en cuenta la historia laboral, la historia de inserción en la que uno es asalariado en un momento y pasa a ser productor por cuenta propia

en el otro o se dedica a la construcción de la propia vivienda en otro momento. Y esas tácticas de adaptación no pueden comprenderse sin apelar al concepto de *unidad doméstica*, incluyendo diversas formas de comunidad, superadora de la visión individualista de los actores económicos. La reciente aparición en la Argentina de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) abre la posibilidad de un sujeto colectivo de esta economía popular. Aunque en su inicio está muy sesgada en su constitución, muy orientada hacia los sectores pobres, sus propuestas y reivindicaciones pueden desarrollar una estrategia de construcción de este sector de la economía popular que nos parece fundamental.

Las propuestas de transformación que estos procesos han generado no se satisfacen con la instalación de un programa neodesarrollista que ha primado en muchos de estos procesos, que se dirige a la economía popular como hacia una masa de excluidos, de pobres, redistribuyendo ingresos y ampliando el acceso a bienes públicos, lo cual es absolutamente necesario, pero insuficiente. Hace falta una transformación mayor, por supuesto en la matriz productiva de toda la economía, pero además en la matriz económica en general, que incluye los procesos de distribución, los procesos de circulación, otras formas de producción y los procesos de consumo. Por ejemplo, la relación cultura-economía, el papel del consumismo en el marco del impulso de una redistribución del ingreso más justa acompañada de una propuesta consumista que genera unas expectativas que probablemente se vuelvan en contra cuando no puedan ser satisfechas. Un proyecto de transformación con orientación nacional y popular no debería eludir el reconocimiento social y político de este sector fundamental de la economía, dándole un papel significativo en su concepción y desarrollo.

La perspectiva de la lucha por la hegemonía no se puede plantear a partir de la pregunta de qué pasó concretamente en estos procesos en el ámbito nacional, en la lucha hegemónica entre proyectos alternativos de país. Si bien es obvio que estos proyectos pueden no tener una integralidad, son propuestas parciales, una lucha entre pre-proyectos con pretensión hegemónica. Proponemos otra mirada, por lo menos complementaria, no como procesos de construcción de una hegemonía nacional solamente, sino también los que consideran la acción de contrahegemonía. Porque en lo que va del siglo, sigue teniendo la hegemonía un proyecto neoconservador de escala global, que reaparece ahora con sus representantes locales, cuya violencia solamente se puede entender porque tienen atrás toda la fuerza de ese proyecto neoconservador global siempre presente. Considerado como

una lucha contrahegemónica y no solo como una lucha por la hegemonía a nivel nacional, el “factor externo” no se limita a la evolución de variables como los precios de las *commodities*, sino incluso a las acciones económicas, políticas y hasta militares de las potencias y corporaciones de alcance global y sus instituciones, así como a los intentos de formación de actores regionales progresistas como fue Unasur.

Este es un proyecto pensado para tres años de investigación, que por más modesto que pretenda ser, no deja de ser ambicioso. Más que producir nuevas evidencias empíricas, nos proponemos estudiar, y posiblemente reinterpretar desde la perspectiva de la economía social, buena parte de lo que se ha producido y producirá por otros investigadores. Esa es una de las razones por las cuales se organiza esta jornada, en la que participan seis investigadores críticos altamente reconocidos que han trabajado sobre este período y que además lo han hecho de una manera que permite conectar sus análisis con el tema de la hegemonía.

Las exposiciones se dividieron en dos paneles para poder dar lugar a las preguntas del público y al debate entre los panelistas. Participaron en una primera mesa de debate Adrián Piva, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Martín Schoor, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Fernando Porta, también de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). En la mesa siguiente lo hicieron Alejandro Gaggero, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Pablo Míguez, de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) y Alberto Bonnet, también de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

La consigna sobre la cual giraron las intervenciones consistía en hacer una descripción, evaluación y balance del ciclo histórico iniciado con posterioridad al año 2001 y que mostraba signos de agotamiento al momento del triunfo electoral de los partidos de orientación liberal encolumnados en la alianza Cambiemos. Dichas intervenciones, agrupadas en dos tandas con tres exposiciones, contaban luego con un debate entre los participantes y los asistentes.

Las exposiciones tuvieron un carácter coloquial, ya que se pretendía que no tuvieran la forma de una ponencia o de un “paper” académico, sino de una presentación de veinte minutos sobre el núcleo de lo que estuvo en juego en un período tan largo y complejo. Por estas razones, el lector va a encontrar presentaciones en un lenguaje accesible y con un tono más político que académico, aunque no por ello menos riguroso. Asimismo, y como el tono de las preguntas e intervenciones también serían de tipo coloquial,

se esperaba ofrecer un material que tuviera características homogéneas tanto de parte de los expositores como de los moderadores y el público.

En la presentación de Adrián Piva se analizan los vínculos entre la acumulación y la hegemonía durante el kirchnerismo como el propio de un modo de dominación “neopopulista”, entendiendo el término populismo en un sentido no peyorativo sino como un modo de incorporación política de grupos y demandas sociales, que presenta continuidades y rupturas respecto del peronismo como proceso originario de constitución de la clase obrera. El kirchnerismo incorporó demandas de grupos movilizados con posterioridad al proceso que culmina con la crisis de 2001, pero con una débil institucionalización de los mecanismos de integración en comparación con ese populismo original. Y a diferencia del menemismo, el kirchnerismo no alcanzó a construir una hegemonía, entre otras cosas, por su dificultad para sostener la apariencia de neutralidad del Estado.

En la intervención de Martín Schoor se analiza como una cuestión fundamental del período la llamada “restricción externa”, como el proceso condicionante, tanto antes como ahora, de la acumulación en la Argentina y sus vínculos con la estructura productiva. Esta dificultad por el aprovisionamiento y el control de las divisas en el régimen de acumulación argentino lleva a Schoor a analizar cuáles son los factores estructurales que determinan esta limitación para sostener el crecimiento y el despliegue sostenido de la acumulación, algunos de los cuales son históricos y otros son específicos de la etapa reciente. Schoor destaca la influencia del aumento de la extranjerización aún en el período posneoliberal, el aumento del déficit industrial de la etapa kirchnerista, así como los problemas que inciden en el saldo negativo de la balanza de pagos como el déficit energético o la fuga de capitales para el control de las divisas, que es un elemento central del régimen de acumulación y tiene consecuencias diferentes si es principal proveedor es el sector exportador o el capital financiero.

En su presentación, Fernando Porta subraya que el kirchnerismo era, antes que un modelo económico, un proyecto político con objetivos económicos. Era un proyecto conducido por la dimensión política pero su fortaleza estaba supeditada al cumplimiento de dichos objetivos económicos. Porta destaca tres componentes del proyecto político, a saber, la política de derechos humanos, la ampliación de derechos de ciudadanía y la inclusión social. Este último elemento, según el autor, es el que ha presentado mayor debilidad a partir de las limitaciones que pone la estructura económica, retomando algunas ideas señaladas anteriormente por Schoor, como

el problema de la restricción externa. El kirchnerismo se propuso como objetivo central la redistribución del ingreso y sus políticas económicas apuntaban en esa dirección, poniéndose del lado del trabajo en la “puja distributiva”. Pero muchas veces dejó librado el tema a su confianza en la continuidad del crecimiento económico de los primeros años como condición necesaria y suficiente, dejando de lado algunas iniciativas de política económica –una reforma financiera más profunda, una reforma tributaria y mayor control del comercio exterior, por ejemplo– que a juicio de Porta podían haber contribuido de manera más sostenida a una perspectiva de cambio estructural.

La presentación de Pablo Míguez analiza el período, intentando examinar la relación entre el Estado y las distintas fracciones del capital, y trata de indagar sobre el hecho de que, además de los sectores típicamente asociados a la estructura productiva como la industria y el agro, aparecen dinámicas propias de la lógica de las finanzas, que responden a una lógica rentista típica del capitalismo contemporáneo y que aparecen descuidadas en algunos análisis locales. El kirchnerismo supuso un intento de arbitraje complicado entre algunas fracciones con la pretensión de promover una estrategia industrial, pero dejó aire para cierto despliegue de las finanzas y la especulación inmobiliaria que fueron escasamente consideradas.

El esquema que Alejandro Gaggero propone para trabajar el período se centra en un tema más puntual que el de la hegemonía: el de la conformación de la gran burguesía empresarial y de su posicionamiento político a partir del estudio de la “cúpula empresaria”, esto es, la dinámica e intereses de las mayores doscientas empresas del país. Esta élite no muestra nunca una representación unificada y se pueden observar ciertos rasgos de continuidad con el período neoliberal alrededor de ciertos tópicos como la mayor concentración y extranjerización del capital, así como la de ámbitos privilegiados de acumulación. Al centrar el análisis en la Asociación Empresaria Argentina surgida en 2002 permite registrar el primer apoyo inicial que recibe el kirchnerismo, para luego ver el alejamiento y la oposición final de un grupo que representa la continuación del Consejo Empresario Argentino. Esto a la luz de las dificultades y trabas que suponen las acciones concertadas de estos grupos de poder económico.

Por último, la presentación de Aberto Bonnet sintetiza los argumentos de su libro reciente sobre el kirchnerismo,¹ al analizarlo como un modo de

1 *La insurrección como restauración. El kirchnerismo 2002-2015*, Buenos Aires, Prometeo, 2015.

dominación política diferente al neoliberal del menemismo, caracterizado como de tipo neopopulista. El menemismo supo construir una hegemonía basada en el disciplinamiento dinerario de la convertibilidad, esto es, de la acción sancionatoria directa del mercado mundial. Señala Bonnet que la crisis e insurrección del 2001 puso un límite a la potencialidad hegemónica del neoliberalismo y en la salida de la crisis económica se fue consolidando una recomposición política del orden de nuevo tipo, basada en la participación activa del Estado, que intentó arbitrar entre las distintas fracciones del capital. En el camino habría quedado la posibilidad de construir una hegemonía alternativa.

En suma, se trata de intervenciones agudas sobre un período sumamente extenso y relevante de la historia reciente, lo que permite pensar las múltiples dimensiones que pueden atravesar el estudio de la acumulación y la hegemonía en un período concreto. El hecho de que las consecuencias derivadas del período estudiado estén influyendo todavía en la presente coyuntura, refuerza la convicción de que para reflexionar sobre este nuevo período histórico –que se vislumbra ciertamente como más regresivo que el que hemos analizado aquí– requiere cierto balance del período en el que se suscitaron finalmente las condiciones de posibilidad de un reemplazo por derecha de las opciones de gobierno. Un hecho que se corresponde además con los cambios de signo que se observan en numerosos países de la región.

José Luis Coraggio y Pablo Míguez

PRIMERA PARTE
Cambio estructural y antagonismo social
en la Argentina reciente

El kirchnerismo. Los límites de una política de desplazamiento del antagonismo social

Adrián Piva

Mi exposición va a partir del análisis de la modalidad de dominación política, es decir, que va a iniciarse con una discusión en torno al problema de la hegemonía, pero en su desarrollo va a aparecer, necesariamente, el problema de los límites que impuso la dinámica de la acumulación a esa modalidad. La restricción externa es, en particular, una dimensión importante para la comprensión de esos límites. Pero teniendo en cuenta el momento en el que estamos hablando –el de la derrota electoral del kirchnerismo– es inevitable que una mirada hacia atrás cobre forma de balance y que tenga como punto de partida ese resultado. Esto no implica de ninguna manera que la exposición trate de fundamentar que necesariamente tenía que producirse esa derrota, sino más bien que el esfuerzo está puesto en tratar de entender por qué las cosas terminaron de ese modo, más que en hacer esfuerzos especulativos de cómo “podrían haber sido”, pero eso no implica inevitabilidad del resultado.

Un problema de este punto de partida está en la relativa contingencia que plantea el propio resultado electoral, la escasa diferencia. Pero también me parece que es importante destacar como un elemento no coyuntural sino de mediano plazo un aspecto del resultado electoral que a veces se deja de lado, que es el hecho de que el kirchnerismo perdió en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Si nos quedamos solo con el 1,5% de diferencia del balotaje se pierde de vista la tendencia del kirchnerismo a perder apoyo electoral en los principales

distritos del centro del país desde 2005 en adelante, espacios de fuerte concentración de los sectores medios urbanos, donde la pérdida fue mayor. Pero también de obreros, entre los que parece haberse desarrollado una pérdida de apoyo especialmente desde 2012-2013. En ese sentido, esta derrota adquiere un carácter menos contingente, es decir, hay contingencia en el resultado del balotaje, pero este expresa también un aspecto más profundo. El otro aspecto que interesa de la situación actual para mirar hacia atrás es el relativo éxito que en los primeros meses de gobierno ha tenido el macrismo en avanzar en una serie de medidas de su programa de ajuste. Una situación que es incierta, que es inestable, que está abierta y tiene además dos caras. Por un lado, una intensa movilización y, por otro lado, una escasa conflictividad en el terreno laboral si tomamos en cuenta el avance del programa de ajuste.

Voy a partir, entonces, del análisis de la estrategia de construcción y reproducción de consenso del kirchnerismo que caracteriza, en mi opinión, al modo de dominación política que voy a denominar “neopopulista”. No utilizo el término “populista” con el significado peyorativo al que suele estar asociado. Si alguien quiere reemplazarlo por “nacional popular” no me opongo, en la medida que ese término comprenda el contenido conceptual que quiero asignarle. Lo primero entonces es clarificar qué entiendo por “populismo”, más específicamente por “populismos latinoamericanos”. En este sentido me distancio de la conceptualización de “populismo” como una lógica política formal que abarcaría formas de dominación política muy variadas al estilo de Laclau. Entiendo al “populismo latinoamericano” como un modo de incorporación política de grupos y demandas sociales excluidos, en condiciones de transformaciones sociales aceleradas y de crisis de hegemonía. Creo que esta definición capta el núcleo central del fenómeno populista y que es común a los diversos estudios que configuran la tradición clásica de análisis del populismo en América Latina.

Este modo de abordar el “populismo latinoamericano” destaca dos dimensiones centrales interrelacionadas. De un lado, un proceso de movilización y, del otro lado, la capacidad de integración política de ese proceso de movilización. La categoría “movilización”, en la tradición de Gino Germani implica, primero, la asimilación de “movilización” y “movilización política”; Germani muchas veces, incluso, parece referir a la “movilización” que no es “movilización política” como una movilización coartada en su fin. Y en segundo lugar este proceso de movilización es un proceso de constitución de un sujeto político. Por lo tanto, los procesos populistas

“clásicos”, el peronismo, en particular, como planteaba Torre, son procesos de constitución de un sujeto político unificado. El problema que tienen en general esas perspectivas (no la de Torre, me refiero, por ejemplo, a Germani) es el contenido evolucionista inscripto en la noción de masas disponibles. En por eso que me interesa la transformación que opera con el concepto de disponibilidad Zavaleta Mercado. En el planteo de Zavaleta Mercado la situación de disponibilidad es constituida por dos polos correlativos: de un lado, la disponibilidad de las masas para una transformación de sus prácticas y creencias; del otro lado, la insuficiente capacidad de integración política del Estado. Esta manera de presentar el problema liga, de manera mucho más clara, crisis de dominación, movilización y constitución de sujetos políticos. Ahora bien, en la medida que ese proceso de movilización es simultáneamente la construcción de un sujeto político, tiene que dejar marcas en los modos de respuesta de ese sujeto a las crisis y a su propia crisis. Pero, además, esta dimensión de los procesos de movilización política característica de los “populismos latinoamericanos” singulariza al peronismo porque, como señala Torre, se trató del proceso de constitución de la clase obrera como sujeto unificado. Y esto lo diferencia de otros procesos populistas latinoamericanos que tendieron a ser más inestables, más tendientes a la descomposición, después de la muerte del líder o de su derrocamiento, cosa que no ha pasado con el peronismo y que ha dejado marcas en las tradiciones del movimiento obrero. No como una esencia inmodificable, sino como tradiciones que se reproducen, se resignifican y se transforman en los propios procesos de movilización, es decir, que son recreadas una y otra vez.

Sin embargo, los “populismos latinoamericanos” no advienen para resolver la crisis de hegemonía de la que surgen, sino que manifiestan, en el modo de dominación política que instituyen, la imposibilidad de resolución de esa hegemonía. Un aspecto esencial de esa imposibilidad es el mecanismo de desplazamiento del antagonismo capital/trabajo hacia una posición exterior, pueblo/antipueblo, pueblo/oligarquía, pueblo/grupos económicos. La diferencia de esta perspectiva con la de Laclau es que allí se trata de la constitución del antagonismo, mientras que aquí se trata de un mecanismo de desplazamiento. Voy a intentar mostrar qué importancia tuvo en el kirchnerismo dicho mecanismo y qué pasó cuando alcanzó sus límites.

Pero antes debemos responder otras preguntas. En primer término, ¿qué diferencias habría entre el “populismo” y el “neopopulismo”? Una primera

diferencia que podemos establecer es la que existe entre un proceso de incorporación primaria, como puede ser el proceso de constitución de la clase obrera como sujeto político en el peronismo, y un proceso de incorporación secundaria, es decir, cuando los procesos de incorporación de demandas de grupos sociales que caracterizan a los “populismos latinoamericanos” se desarrollan sobre la base de tradiciones políticas preexistentes. Este sería el caso del kirchnerismo. Una segunda diferencia, para el caso aquí abordado, surge de los cambios en la estructura económico-social desde 1976 en adelante que han impactado en la composición sociopolítica del peronismo. Eso explica que la apelación a lo popular sea más indeterminada, que esté menos ligada a ese sujeto que era la clase obrera sindicalmente organizada, que sigue siendo muy importante, central en mi opinión, pero que efectivamente haya una heterogeneización de esa composición de su base popular.

En segundo término, ¿en qué sentido el kirchnerismo es “neopopulismo”? Para eso hay que referirse brevemente a los años noventa. La década del noventa fue un período de transformaciones estructurales aceleradas, de un proceso muy veloz de reestructuración del capital y del Estado, que implicó una reorganización general del capitalismo, cambios profundos en la estructura de clases y en la forma de Estado, años de un proceso caracterizado por una fuerte ofensiva del capital contra el trabajo. Pero que, a su vez, tuvo como condición de posibilidad la construcción de una hegemonía sustentada en un proceso de desmovilización de la clase obrera. Si decíamos que el proceso de movilización es un proceso de constitución de sujetos políticos, el proceso de desmovilización de los trabajadores se puede traducir como un proceso de desorganización de la acción colectiva de la clase obrera. Por su parte, el proceso de movilización que se inició en los años 1996-1997 planteó problemas a la capacidad de integración política. Si la hegemonía constituida durante el menemismo tuvo como base aquella desmovilización, la movilización planteó problemas a la continuidad de esa hegemonía articulada alrededor del régimen de convertibilidad. Desde esa perspectiva, el kirchnerismo tuvo tres características que lo vinculan al populismo o que permiten caracterizarlo como “neopopulismo”. En primer lugar, fue una estrategia de recomposición del consenso poscrisis de 2001 basada en la incorporación política de demandas de esos grupos sociales movilizados desde los años 1996-1997 y en particular durante el año 2001. En segundo lugar, caracterizó a ese proceso de incorporación política una dimensión que ha sido destacada en la literatura sobre populismo, en

general con una carga negativa: la escasa o nula separación entre integración política de demandas e incorporación de las organizaciones obreras y populares a la coalición política de gobierno. Yo prefiero prescindir de aquel juicio negativo –que en general parte de alguna definición procedimental de la democracia como criterio normativo–. Lo que me interesa es el déficit de institucionalización que esa dimensión del proceso de incorporación política señala, ya que es un indicador de las dificultades del kirchnerismo para construir una hegemonía (no puedo desarrollarlo acá, pero como he sostenido en diferentes trabajos, no hubo en el período kirchnerista construcción de hegemonía en el sentido fuerte, esto es, como institucionalización, “estatalización”, de mecanismos de integración de los antagonismos sociales).

Y, por último, como tercer rasgo neopopulista, debemos señalar la intervención activa del Estado en los conflictos y su papel en la redistribución de ingresos y poder entre clases y fracciones de clases. A partir de este rasgo, el kirchnerismo y otros procesos sudamericanos de la última década han sido identificados como “bonapartistas”. Mi posición es que esa caracterización es inadecuada. Por un lado, personalmente no creo que “bonapartismo” sea una categoría que se pueda universalizar o generalizar, y el único aspecto universal que señala el análisis de Marx en “El 18 brumario de Luis Bonaparte” refiere a la tendencia a la autonomización del Estado respecto de la clase dominante y de la “sociedad civil”, una tendencia que por ser general es inadecuada para definir rasgos específicos del Estado y de la dominación en condiciones históricas concretas. Pero además, en este caso, la intervención activa del Estado, más que constituirlo en árbitro, y me parece que acá reside uno de los problemas significativos para la caracterización del kirchnerismo como “neopopulismo”, tendió a producir problemas de legitimación, es decir, tendió a producir una ruptura de la apariencia de neutralidad, otro aspecto significativo de la dificultad del kirchnerismo para construir una hegemonía.

La última dimensión que es relevante para caracterizar al kirchnerismo como “neopopulismo” es un rasgo de los “populismos” que señalaba Touraine, lo que denominaba como “dualidad de los populismos”. Según Touraine, los “populismos”, por un lado, plantean en su discurso cierto cuestionamiento del orden social pero, por otro lado, ese mismo discurso debe legitimar una dirección económica que depende del flujo de inversiones, lo que plantea una contradicción. En esa “dualidad” quiero situar el modo particular en que se desarrolló desde 2003 la contradicción entre

necesidades de acumulación y necesidades de legitimación que, desde mi perspectiva, es indispensable para entender la dinámica económico-política argentina desde 1989, pero que adquiere características muy específicas y particularmente importantes durante el kirchnerismo. Lo que caracterizó al kirchnerismo, desde este punto de vista, fue un desfase entre acumulación y política económica. Este desfase tuvo su origen en el dilema que a partir de cierto punto se presentó a la estrategia kirchnerista de recomposición de la acumulación y de la dominación política: adecuar la política económica a la necesidad del proceso de acumulación o desarrollar una política orientada a darle continuidad a aquel proceso de reconstrucción y reproducción del consenso basado en la satisfacción gradual de demandas. Desde el punto de vista de la acumulación, el problema que se planteaba era el de la subordinación de las demandas obreras y populares a una dinámica de acumulación cuyos fundamentos estructurales se encontraban en el proceso de reestructuración capitalista de los años noventa y cuyas consecuencias más profundas sobre la estructura económica no se habían revertido. Desde el punto de vista del proceso de reconstrucción del consenso, el problema que se planteaba era el de los límites que imponía –e impone– ese proceso de acumulación, dados sus fundamentos, a la continuidad de la satisfacción gradual de demandas. Cuando se alcanzan esos límites, el mecanismo típicamente populista de desplazamiento del antagonismo interno capital/trabajo hacia una oposición exterior –lo que significa redefinir el campo de confrontación social y alejar el conflicto del centro del sistema– se vuelve más importante. Ese desplazamiento “espacial” se conjuga con un desplazamiento temporal del antagonismo, una posposición del desenlace –involucrado en el dilema acumulación/legitimación– una de cuyas manifestaciones más significativas es la inflación.

Desde esta perspectiva, si ensayamos una periodización, podemos encontrar un primer momento en el que este dilema emerge, que es el de la salida del ministro Lavagna del gobierno de Néstor Kirchner en 2005: ¿hay que “pisar” el aumento del gasto público y contener los aumentos salariales en función de adecuar la política fiscal y monetaria a un proceso de acumulación centrado en la exportación de productos agroindustriales? O ¿hay que impulsar el aumento del gasto público y sostener el proceso de recuperación del salario real para darle continuidad al proceso de reconstrucción y reproducción del consenso basado en la satisfacción gradual de demandas? El kirchnerismo, claramente, se decide por la

segunda opción; eso es lo que significa la salida de Lavagna, pero esto solo implica que el dilema se postergue en el tiempo. Reaparece en la medida que se empiezan a reducir los “superávit gemelos” (comercial y fiscal). En particular, la reducción del superávit fiscal está en el centro del conflicto con la burguesía agraria en 2008. En el contexto del aumento del peso de los subsidios al transporte, la energía y los servicios públicos privatizados en el gasto público y, en menor medida, de la carga del capital y de los intereses de la deuda externa en condiciones de restricción al endeudamiento externo, el gobierno se lanzó a la disputa por el excedente con la burguesía agraria y agroindustrial. La resolución del conflicto fue ambivalente, porque por un lado el kirchnerismo logró recuperarse de la situación de derrota del 2008 y del 2009 y reconstruir el consenso, pero, por otro lado, la burguesía agraria logró imponer un bloqueo al aumento de la presión tributaria sobre la gran burguesía en su conjunto. Esto se expresó de diversas formas, por ejemplo, en el aumento del peso de los recursos tributarios procedentes de ganancias a la cuarta categoría respecto de ganancias corporativas y de las propias retenciones. Pero también se expresó en una profundización de la lógica de desplazamiento temporal de la contradicción a través de la estatización de las AFJP. Pero finalmente reapareció la restricción externa.

La restricción externa apareció como un último límite que puso de manifiesto la ilusión de poder sostener indefinidamente la autonomización del Estado respecto de las condiciones de acumulación, en última instancia, la ilusión de que el Estado está “afuera” del capital y que puede regular desde ese lugar de exterioridad el proceso económico sosteniendo también indefinidamente el crecimiento económico y la satisfacción de demandas obreras y populares. En realidad, el Estado es parte de ese proceso que es a un tiempo económico y político. La restricción externa afecta la propia capacidad del Estado de darle continuidad a ese proceso de incorporación de demandas como mecanismo de legitimación. En ese sentido, lo que se abre a partir de 2011 es un período de cuasiestancamiento, la tasa de crecimiento anual promedio del PBI se situó en esos cuatro años debajo del 1%. Pero el estancamiento no fue meramente económico, se trató también, y quizás en especial, de un estancamiento político. Si hasta 2011 el mecanismo de desplazamiento “espacial” y temporal genera tendencias a la erosión de los fundamentos del crecimiento económico (inflación, apreciación cambiaria, reducción de superávit gemelos, etcétera) y es la confesión de las dificultades de la construcción de una hegemonía, a partir de 2012 el

mecanismo de desplazamiento del antagonismo empieza a ser crecientemente difícil y se transforma cada vez más en un mecanismo de “giro en falso”, que tiende a agudizar las tensiones más que a posponerlas. Si esta lectura del proceso económico-político es correcta, lo que sucedió en ese último período es que la disputa política se trasladó hacia las vías de salida de la situación de estancamiento.

El kirchnerismo, entonces, quedó atrapado en el dilema que le planteaba la contradicción entre la necesidad de relanzar el proceso de acumulación y de sostener su estrategia de reproducción del consenso. Si, por un lado, existía una creciente presión por el ajuste para dar respuestas a las necesidades del proceso de acumulación, por otro lado, cuando el kirchnerismo se embarcó en políticas de ajuste gradual, como en 2014 o incluso antes en los intentos de aumentar tarifas, se enfrentó a procesos de deslegitimación, a los que era especialmente vulnerable debido a su propia estrategia de reconstrucción y reproducción del consenso. Y es en ese desplazamiento de la disputa política hacia la salida de una situación de estancamiento en el que me parece que hay que encontrar parte de la explicación del relativo éxito para instalar la idea de la inevitabilidad del ajuste porque, en efecto, la discusión pasó a ser entre gradualismo creciente o shock. En la campaña electoral, con más o menos eufemismos, los principales candidatos discutieron la magnitud y la velocidad del ajuste.

Por último, y ya para terminar, el fracaso del mecanismo de desplazamiento “espacial” y temporal del antagonismo capital/trabajo necesariamente devuelve el conflicto al centro del sistema. Esto no significa que los actores se representen el conflicto como conflicto de clases, pero lo devuelve en términos de las tareas y de los objetivos que asume el marxismo. Desde esa perspectiva, los principales objetivos del gobierno de Cambiemos son, en primer lugar, subordinar las demandas obreras y populares a las necesidades, posibilidades y restricciones del proceso de acumulación y, en segundo lugar, darle a dicha subordinación cierto grado de institucionalización que le dé previsibilidad a la dinámica económico-política, o sea, la construcción de una hegemonía. Es decir, que la tarea que ha asumido el gobierno como central y que lo caracteriza puede resumirse en una frase: restablecer la autoridad del capital sobre el trabajo a nivel social y en los lugares de trabajo. Es muy pronto para saber si lo va a poder hacer, pero en principio, el primer objetivo, en el corto plazo, podría estar lográndolo. Es decir, efectivamente, se consolida una caída del salario real, una redistribución regresiva del ingreso, etcétera. Para saber

si va a poder alcanzar el segundo objetivo, en definitiva el fundamental, es muy temprano y creo que el carácter dependiente del desarrollo capitalista en la Argentina, y la restricción externa al crecimiento resultante, imponen límites estrechos a la posibilidad de construcción de una hegemonía o al menos obliga a una política de disciplinamiento social de gran alcance.

Los gobiernos kirchneristas: entre la holgura y la restricción externa. Una mirada estructural

Martín Schoor

Por los temas que vine trabajando en la Universidad Nacional de San Martín, voy hacer alguna reflexión sobre la hegemonía, pero más vinculado al tema que trabajé en el último tiempo, que es el tema de la restricción externa. La pregunta interesante para empezar esta conversación tiene que ver con: ¿Qué sucedió que pasamos de una holgura externa durante los gobiernos del kirchnerismo a una situación de restricción externa, sobre todo a partir de la década actual, de 2010?

Se trata de un proceso que viene con una virulencia inusitada. Ahí hay todo un debate. Algunos plantearon en su momento que era un problema de liquidez a raíz del deterioro en los términos de intercambio, otros plantearon que los problemas tienen que ver con no haber resuelto el diferendo con los fondos buitres y el escenario de disputa con el capital extranjero internacional. Nosotros nos paramos en una mirada distinta, que trata de identificar los factores estructurales que están detrás de la problemática de la restricción externa históricamente en la Argentina, y en el kirchnerismo en particular, agravado por procesos específicos de esa etapa. Ahí nosotros identificamos cuatro elementos. Uno, por supuesto es la deuda, pero no vamos a hablar de la deuda porque es, capaz, el más obvio.

El primer elemento remite a la cuestión de la extranjerización. Todos sabemos que la Argentina en los años noventa sufre un proceso de extranjerización muy fuerte, que la década o el período de los gobiernos del kirchnerismo no lo profundiza, pero no lo corrige de modo estructural. Ahí, las

doscientas empresas más grandes de la Argentina (que es una manera que nosotros tenemos de operacionalizar al poder económico) en 2015 daban cuenta aproximadamente del 20% del producto y, más o menos, de las dos terceras partes de lo que exportaba la Argentina. Dentro de ese puñado de grandes empresas, 137 están vinculadas a capitales extranjeros, o sea, ahí hay un núcleo estructural, creo yo, problemático de esta cuestión. En los años recientes, creo que hay tres elementos que explican la no reversión de la extranjerización. Dos de índole normativo, que tienen que ver con las herencias neoliberales no corregidas, básicamente, con la ley de inversiones extranjeras de la dictadura, ampliada a favor del capital extranjero en tiempos del menemismo. Y la otra, más gravosa por lo menos de mi punto de vista, la Argentina en los noventa firma aproximadamente 60 tratados bilaterales de inversión y el kirchnerismo deja como herencia 55 de esos casi 60 tratados sin haberlos denunciado, con lo cual ahí hay un elemento crítico en términos de tratar de establecer políticas de contenido nacional y desarrollo nacional con una economía tan extranjerizada. La otra cuestión es la debilidad del capital nacional, que obviamente no es una novedad de estos tiempos sino algo más bien histórico. La extranjerización tiene un efecto crítico sobre la balanza de pagos en múltiples sentidos, no solo remisión de utilidades y otros flujos de salida de divisas, sino también por el tipo de inversión o por el formato de la inversión que llevan adelante los capitales extranjeros de anclaje productivo muy vinculados a importaciones, que en estos años más recientes terminaron desplazando producción nacional. Para tener un dato del impacto de la extranjerización de la restricción externa en el año 2011, antes del llamado “cepo” cambiario, el capital extranjero radicado en el país tuvo una masa total de utilidades que superó los 12 mil millones de dólares, el 70% se remitió al exterior y comprometió alrededor de la mitad del superávit comercial, o sea, ahí hay un tema que me parece estructuralmente complejo de la cuestión externa. Y lo vemos en los tiempos actuales, cuando levantado el “cepo” y endeudando la economía como la estamos endeudando, uno de los principales renglones de la salida de divisas es, precisamente, la rendición de utilidades por parte del capital extranjero.

El segundo elemento estructural de la restricción externa tiene que ver con el déficit del sector industrial en materia comercial. Solo para poner un número, en 2014 y 2015 la industria tuvo un desempeño bastante pobre y el déficit acumulado superó los 15 mil millones de dólares. Ahí hay un tema que hay que atender, que obviamente en la etapa actual con este esquema

de política va a agravarse sobremanera. Desde el punto de vista de la mirada nuestra, nos interesa qué factores explican esta restricción externa en el campo industrial, en particular en los tiempos del kirchnerismo. El primero tiene que ver con la consolidación de una matriz exportadora muy afinada en la producción de *commodities*: el 50% de lo que exporta nuestra industria es agroindustria. Pero a su vez desde el lado importador me parece que hay tres cuestiones que hay que tener en cuenta. La primera es que la estructura heredada del desmantelamiento industrial del neoliberalismo no es fácil de revertir, ni a corto ni a mediano plazo. El segundo tiene que ver con el tipo de fomento industrial que se apuntaló, jerarquizando sectores con un componente importado muy fuerte. Estoy pensando particularmente en toda la política de estímulo directa, indirecta a la venta y a la producción automotriz y de electrónicos de consumo en Tierra del Fuego, con una ausencia ostensible de políticas sustitutivas, y por lo tanto, generando una presión muy fuerte sobre las cuentas externas. Y el tercer elemento que me parece central para discutir el estilo de industrialización de estos años tiene que ver con que muchos instrumentos de fomento terminaron generando un proceso de sustitución inversa, o sea, un proceso por el cual en distintos renglones de la estructura productiva nuestra, las importaciones terminaron alentando desplazamiento de producción nacional. Nosotros hicimos algunos estudios sobre los proveedores de la industria petrolera, sobre el sector de bienes de capital, sobre automotriz y Tierra del Fuego y en los cuatro se ve más o menos lo mismo: una proporción relevante de las importaciones de esos cuatro sectores generaron desplazamientos de bases productivas nacionales, con lo cual no es solamente un tema de divisas, sino también, recuperando un poco esta idea de Aldo Ferrer, una cuestión de dependencia tecnológica y de pérdida desde el punto de vista de la densidad industrial y de la densidad nacional.

El tercer elemento, en la mirada nuestra, es el déficit energético; me parece que ahí hay una cuestión estructural bien pesada. También para tener una referencia, 2013-2015, cuando la economía argentina creció muy poco, en algún año incluso cayó, el déficit energético acumulado superó los 17 mil millones de dólares, o sea, es un problema que no tiene que ver solo con el crecimiento económico, sino que es un elemento estructural. En la explicación del déficit concurren esencialmente dos procesos. El primero tiene que ver con una herencia de los noventa, que en estos años, lejos de haberse corregido se afianzó: una matriz energética dependiente de los combustibles fósiles. Y el segundo, en mi opinión, es un poco el sustrato detrás de la

estatización de YPF en 2012, del capital accionario mayoritario de YPF, una política energética que apuntaló una lógica de funcionamiento muy ligada a una política de subexploración por parte del oligopolio petrolero. Muy poca o nula inversión desde el punto de vista de ir renovando las reservas vinculadas al ciclo productivo. Ahí, me parece que se juegan continuidades y rupturas interesantes para dar cuenta de una cuestión, insisto, estructural, de la problemática de la restricción externa que estamos tratando de plantear.

El cuarto elemento, en la mirada nuestra, insisto, tiene que ver con la fuga de capitales. Los años del kirchnerismo fueron años, hasta el 2011, de mucha fuga. Con picos importantes en 2008, en el marco del conflicto con las patronales agropecuarias. En 2009-2010 ya hay una reducción, pero se sostiene un nivel de fuga importante y en 2011, en pleno escenario electoral, que va a desembocar en el triunfo de Cristina, un nuevo pico de fuga fuerte. En la mirada nuestra, la fuga, si bien es parecida a la etapa más típica del modelo financiero vigente entre 1976 y 2001, tiene una diferencia cualitativa no menor. En aquellos años, sobre todo en los noventa y en los años de la dictadura, lo que se remitía afuera era ganancia financiera, muy vinculada al ciclo del endeudamiento externo que va a explotar en el 2001. En la etapa más reciente, la del kirchnerismo, nosotros la focalizamos más en ganancias extraordinarias en sectores de anclaje productivo con una lógica del capital más concentrado muy poco proclive a la reinversión de esas utilidades. En la etapa actual, levantado el cepo, vuelve la deuda, vuelve la fuga pero más ligada, nuevamente, a cuestiones de especulación financiera y no tanto a ganancias extraordinarias en el sector productivo.

Entonces, estos cuatro elementos son elementos a tener en cuenta en la discusión de la restricción externa, insisto, desde una mirada estructural que tiene que ver con aspectos nuevos que incorpora el kirchnerismo, como me parece la cuestión energética, como un elemento crítico pero también elemento de continuidad importante entre la etapa más reciente y los años de neoliberalismo extremo.

En una economía con tanta propensión a la salida de divisas, el actor económico o la fracción del capital que pone la divisa asume una centralidad estructural clave desde el punto de vista de sostener el modelo de acumulación. Por lo tanto, si yo sostengo, morigerado o logro sobreponer por un tiempo la restricción externa con dólares financieros (años noventa, dictadura y actualmente) le voy a dar al capital financiero y a los acreedores externos en particular una centralidad estructural relevante para dar cuenta la dinámica del modelo de acumulación. Si por el contrario, como

durante muchos años del kirchnerismo, los dólares o las divisas me las nutren los sectores exportadores, esos dólares comerciales le están dando a esos capitales una centralidad estructural destacada, más allá del discurso político que capaz los tenía como enemigos en una discusión más política, estructuralmente, me parece que jugaron un rol muy importante.

¿Qué es lo que uno ve en la evolución de quién financió, digamos, la restricción externa en los tiempos del kirchnerismo? Durante mucho tiempo los dólares comerciales, o sea, los grandes exportadores, dado que en la Argentina 50 empresas concentran alrededor del 60% de las exportaciones totales del país, con lo cual, la centralidad estructural y el poder de veto que tienen estos actores son muy fuertes. En el escenario del creciente, incipiente y después fuerte deterioro en los términos de intercambio, desde mediados de 2012 el gobierno cambia la estrategia y empieza a tratar de conseguir –y obtiene algo de– financiamiento de algunos organismos multilaterales. Después, en algún otro momento, aparecen acuerdos financieros y productivo-comerciales muy cuestionables desde el punto de vista del perfil de especialización que van a ir generando con China, particularmente, que sobre todo en el último tiempo van a ser importantes desde el punto de vista de generar ingresos de divisas para paliar estos escenarios de restricción externa. Y el último, el ajuste parcial de 2014 cuando se empieza a tener crecientes problemas por esta salida fuerte de divisas estructural que enfrenta la economía argentina. El gobierno de 2014 hace una política de ajuste que empieza con una devaluación, con una suba de tasa y con cierta contención del gasto público, pero en la medida que ese ajuste empezó a generar complicaciones porque atacaba la base social del gobierno, el mismo gobierno empieza a complementarlo con algunas cuestiones compensatorias que me parece que no fueron menores. Ahora, el resultado de eso fue un año en el que el salario cayó entre un 5% y un 10% según dónde nos paremos en el cómputo, y una recesión muy fuerte en el nivel de actividad, o sea, me parece que en un balance y una periodización del kirchnerismo, por lo menos en la Argentina, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta.

Para cerrar quería enfatizar esto, debemos pensar la restricción externa desde una mirada más estructural y no desde un problema de liquidez, ver o tratar de focalizar para discutir la hegemonía, por lo menos en una cuestión económica: cuál es la fracción social que pone las divisas me parece que no es menor desde el punto de vista de la centralidad que va asumir esa fracción social en la dinámica del modelo de acumulación, más allá del discurso que en el plano político se le otorga a esa fracción social.

Estructura y distribución: un conflicto no resuelto

Fernando Porta

Voy a plantear algunas cuestiones sintetizadas en un capítulo de un libro de próxima aparición;¹ este capítulo, que escribí junto a Juan Santarcángelo y Daniel Schteingart, se llama: “Un proyecto político con objetivos económicos, los límites de la estrategia kirchnerista”. El título retoma una expresión con la que hace ya varios años Alfredo Zaiat, cuando se discutía si el kirchnerismo tenía o no un modelo económico, quiso caracterizarlo. Zaiat dijo algo así como “no se trata de un modelo, sino de un proyecto político con objetivos económicos”. Esta expresión fue asumida expresa e inmediatamente por la propia presidenta, Cristina Fernández, como una definición del kirchnerismo. Se trataba de una frase muy interesante, muy atractiva, primero, porque de algún modo confirmaba la jerarquía de la política sobre la economía en el ideario kirchnerista, el mensaje de que era el proyecto político el que gobernaba o conducía la economía, y no al revés; pero también porque dejaba latente la idea de que si esos objetivos económicos no fueran alcanzados o se vieran comprometidos, muy probablemente también la fortaleza del proyecto político tendería a debilitarse o, incluso, a desaparecer. Mis argumentos de aquí en más van a ir en relación con esta cuestión.

El proyecto político del kirchnerismo se resume en tres componentes básicos. Uno, claramente constitutivo del proyecto kirchnerista, podría ser

1 *Los años del kirchnerismo*, compilado por Ana Castellani y Alfredo Pucciarelli, Siglo XXI.

sintetizado en la idea de “memoria, verdad y justicia”; otro, que podríamos llamar de “ampliación de ciudadanía”, y finalmente un tercero, considerado de manera genérica como de “inclusión social”. El de “memoria, verdad y justicia” se relaciona en esencia con la construcción alrededor de la política de derechos humanos; para desarrollar este componente el kirchnerismo tuvo desde el principio una estrategia. Adoptó una estrategia clara en los modos de convocar actores, de generar consenso y de alinear las instituciones: se trazó un objetivo determinado, le construyó viabilidad social y política y avanzó significativamente. También, en cierto sentido, hubo una estrategia rectora para la consolidación del objetivo de “ampliación de ciudadanía”; quizás aquí la convocatoria de fuerzas fue algo más dispersa, pero alcanzó a integrar discusiones y colectivos sobre medios o cuestiones de género, étnicas y de lucha contra la discriminación que ampliaron efectivamente el horizonte y la cobertura de los derechos ciudadanos.

Mi idea es que, por el contrario, el kirchnerismo no fue estratégico en el abordaje de la cuestión de la “inclusión social” y que, en última instancia, la ausencia de una estrategia efectiva para garantizar permanentemente ese objetivo terminó siendo una debilidad del proyecto político. El kirchnerismo se propuso una serie de objetivos económicos y desarrolló una serie de elementos e iniciativas económicas, pero careció de una estrategia consistente de desarrollo; esta es la hipótesis y argumentación principal presente en el artículo al que recién hice referencia y sobre la que a continuación voy a hacer algunas consideraciones.

Voy a tratar de no repetir, al menos no demasiado, lo planteado por mis compañeros de mesa, con cuyas apreciaciones, en general, coincido. Creo que, por su propia configuración, la estructura económica argentina pone límites relativamente estrechos al horizonte, al ritmo y al sendero de la acumulación, comprometiendo de manera severa las perspectivas de crecimiento económico y aún más seriamente a los procesos de redistribución de ingresos. Dicha estructura productiva es herencia de las transformaciones violentas de la dictadura cívico-militar del 76, de la profundización de tales transformaciones en la etapa del menemismo/neoliberalismo y también del modo específico en que se procesó el colapso de la convertibilidad y la crisis subsecuente. Ahora bien, dicho esto, reconociendo que se trata de dos dimensiones constitutivas de una unidad y de un modo meramente analítico, me gustaría situar por separado algunas características de la estructura socioproductiva, por un lado, y de la estructura tecnoproductiva, por el otro. Anticipándome a esas consideraciones, voy a plantear que si no

se producen transformaciones significativas en ambas dimensiones de la estructura es casi imposible para la sociedad argentina transitar un sendero de desarrollo deseable, alcanzar crecimiento económico con inclusión social, democratizar el acceso a bienes públicos y satisfacer de manera plena el derecho de acceso a educación, salud y vivienda.

Una porción significativa de nuestra estructura productiva está asentada sobre una base de producción de materias primas y *commodities* con escasa transformación asociadas a la ventaja y la renta natural, por una parte, y, por otra, en un conjunto de sectores –de servicios y aún manufactureros– que funcionan en condiciones de prestación monopólica dirigida a mercados cautivos: en este último caso el vector de acumulación principal está ahí, en la ganancias extraordinarias que se producen por esa combinatoria. A la vez, el resto de la estructura, tanto en las llamadas economías regionales como en la mayoría de las franjas productivas de la industria y los servicios, se caracteriza por estar especializada en las gamas de menor calidad de las respectivas producciones y por sus débiles condiciones de reproducción. Lo más preocupante en este caso es que, en la actual configuración de la economía mundial, en esas gamas se compite por precios, es decir, se compite por costos laborales; por lo tanto, la competencia tiende a ser de tipo predatoria, sobre todo si se considera que a nivel mundial hay oferentes que trabajan con costos salariales bajísimos y en condiciones de sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Es fácil percibir que una estructura tecnoproductiva así constituida pone límites al crecimiento. A su vez, la estructura socioproductiva, el modo de gobierno o de conducción del aparato productivo, la naturaleza de las fracciones de capital que le están asociadas y sus estrategias predominantes tienden a reforzar ese carácter recesivo y regresivo; abundan los comportamientos de tipo rentista o defensivo. Nuestros grupos económicos, pero también las multinacionales que supimos conseguir, desarrollan en general estrategias de acumulación basadas en rentas extraordinarias; en la enorme mayoría de las veces no precisamente por tratarse de lo que llamaríamos “renta schumpeteriana” o rentas de innovación, sino por basarse en mecanismos de transferencia y apropiación del excedente habitualmente intermediados por el Estado.

Esta estructura –y en esto coincido plenamente con mis compañeros de mesa– no ha sido modificada en forma sustantiva durante los gobiernos kirchneristas y, al no serlo, terminó poniéndole límites a su propia estrategia. Estos límites aparecen bajo distintas manifestaciones, como, por

ejemplo, los mecanismos que instalan la restricción externa o que instalan y difunden las presiones inflacionarias; también los que llevan a la restricción fiscal, ya que la fiscalidad argentina está muy asociada al crecimiento y en particular al nivel de los ingresos externos, por lo que en el marco de una coyuntura recesiva o de volatilidad a la baja de los precios internacionales los ingresos fiscales se resienten. Y por esa razón, en un contexto recesivo la capacidad del fisco para intervenir con políticas compensatorias es menor, justo en el momento en que la potencia de respuesta estatal sería más necesaria. Sintetizando, es aquella configuración de las estructuras tecnoproductiva y socioproductiva lo que está por detrás de la aparición recurrente de la restricción externa y de la restricción fiscal, factores que complicaron la gestión de la economía kirchnerista en sus últimos años.

Pero también, y esto me parece central, es el origen de la aparición recurrente de lo que podríamos llamar “la restricción distributiva”, tanto en el plano de la distribución funcional del ingreso –recordar el sempiterno objetivo del “fifty-fifty”–, como en el plano de la equidad en la pauta de distribución interpersonal de los ingresos. Por supuesto, el kirchnerismo avanzó en mejoras distributivas, punto sobre el que haré algunos comentarios más adelante; pero el hecho de no incluir en su estrategia una transformación sustantiva de la estructura productiva y sus instituciones de gobierno es lo que de algún modo le terminó poniendo un límite cercano a su pretensión de crecer redistribuyendo. Sin duda, la experiencia kirchnerista desmiente claramente la teoría del derrame, porque muestra que se puede crecer y distribuir al mismo tiempo; pero también esta experiencia muestra que, al menos en el caso argentino, esa intención encuentra un límite si no se remueven las causas estructurales que tienden a frenar la acumulación y no se alteran las causas estructurales de las estrategias rentistas o defensivas.

Planteo que el kirchnerismo puso a la estructura heredada de todos los shocks traumáticos de mediados de los setenta para acá a caminar en un sendero macroeconómico diferente al de los años noventa; le dio a esa misma estructura un marco de una macroeconomía de crecimiento, para llamarla de algún modo, en el que las políticas macroeconómicas jugaron un papel central en sentido expansivo durante buena parte del período. Tanto la política fiscal como la monetaria fueron siempre expansivas; pero además, sin ser algo que el kirchnerismo fundó pero que sí aprovechó al menos en una primera etapa, se desarrolló en el marco del llamado, eufemísticamente, “tipo de cambio competitivo”, política que había sido uno de los modos principales de salida de la crisis del 2002 y que había implicado

una brutal transferencia de ingresos de los sectores asalariados y de ingresos fijos a los sectores del capital. La existencia de importante capacidad ociosa y de niveles de rentabilidad extraordinaria para el sector privado a partir de la pesificación asimétrica, la licuación de los pasivos y la condonación de deudas con que se gestionó la crisis del 2002 generó las condiciones iniciales para que esa estructura, frente a renovados impulsos de la demanda, se reactivara relativamente rápido y, al mismo tiempo, mediante la aplicación de políticas específicamente dirigidas, posibilitara también avanzar en un proceso de redistribución de ingresos significativo.

Suelo insistir con que cada gobierno jerarquiza y prioriza políticamente por alguna razón, tanto en sus estrategias de comunicación como en su accionar concreto, una variable económica; se trata de una meta, un conjunto de indicadores o un problema económico al que se le asigna una importancia política central. Hemos tenido gobiernos en la Argentina en los que la inflación o el déficit fiscal, por ejemplo, han sido señalados como la preocupación principal, casi excluyente. Yo creo que la variable económica que fue rectora de las políticas del kirchnerismo es claramente la distribución del ingreso; esa fue la variable económica privilegiada, se buscó, de modo predominante, apuntalar un proceso redistributivo. Lo que, sin duda, hace sistema con las mejores tradiciones del peronismo, pero que también, por otro lado, aparecía como una reacción requerida por buena parte de la sociedad frente a los efectos más perniciosos de la política del neoliberalismo. Para ello, el kirchnerismo llevó adelante algunas reformas estructurales importantes: me refiero a cambios institucionales o de gestión que permitieron recuperar la capacidad de hacer política económica nuevamente; es decir, el kirchnerismo recuperó para el Estado el manejo de ciertos resortes que movilizan y pueden producir o alcanzar, al menos por un tiempo determinado, los efectos que se están buscando. La estrategia de desendeudamiento fue sin duda un elemento central, generó en el inicio una gran capacidad de maniobra fiscal y grados inéditos de holgura externa que postergaron por bastante tiempo los aludidos límites originados en la dinámica de acumulación de la estructura productiva. Notemos que es recién hacia 2011 cuando empieza aparecer con fuerza el fantasma de la restricción externa; pero hasta ahí se había crecido a tasas, digamos, chinas, se habían redistribuido ingresos y se habían generado puestos de trabajo y absorbido desempleo sin que el sector externo apareciera como una limitación.

La estrategia de desendeudamiento cumplió un papel esencial en esta dinámica, además de generar los beneficios asociados a la desaparición del monitoreo y los condicionamientos de los organismos financieros multilaterales; por eso digo que fue una reforma estructural que le brindó al gobierno una enorme capacidad de operación y ejecución en materia de política económica. También en el primer período, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se instaló otra reforma absolutamente central y decisiva para el proceso de redistribución, como fue la recuperación de la institucionalidad reguladora del mercado de trabajo. Reinstalar las negociaciones colectivas y las discusiones paritarias y extender su aplicación a un amplio conjunto de sectores y actividades sin tradición en esa materia permitió alimentar de manera positiva la dinámica salarial y mejorar las condiciones de trabajo.

Esto le dio desde el punto de vista institucional una potencia muy fuerte al ejercicio de la redistribución de ingresos. Voy a tratar de explicar por qué me parece un instrumento clave. El conflicto redistributivo es inmanente a cualquier economía capitalista y es expresión de cómo se desarrollan sus dos contradicciones principales, la que opone al capital y a la fuerza de trabajo, por un lado, y a la competencia intercapitalista, por el otro. Ahora bien, en el caso argentino y tal como varios autores han elaborado hace ya tiempo y yo coincido, el conflicto distributivo tiene un piso relativamente más elevado que en otras sociedades y se constituye en un rasgo característico de la dinámica de la acumulación. Esta particularidad se relaciona con la capacidad de captura de excedentes que, bajo distintos mecanismos, disponen algunas fracciones del capital, pero también dice de la capacidad reivindicatoria, acompañada por modelos institucionales definidos, que han sabido construir en la Argentina los asalariados y los sectores populares en general durante, por lo menos, los últimos setenta años. De más está decir que tiene mucho que ver con la génesis y el devenir del modelo político del peronismo. Por la acción de las luchas populares, por la intensidad de su organización política, los asalariados argentinos tienen la capacidad para disputar la parte que les corresponde de la torta, sea esta más grande o más chica en correspondencia con los avatares del ciclo económico.

Como dijimos, los mecanismos a los que apelan en esta disputa las fracciones del capital son diversos. Uno, muy importante, es el control de la oferta de divisas, lo que opera, a la vez, como una vía de valorización y una maniobra de chantaje permanente que condiciona, entre otras, la política cambiaria y suele forzar transferencias de ingresos y patrimoniales cuantiosas.

Otro, y sobre esto Martín Schorr ha producido mucho análisis relevante, es la capacidad que tienen algunos sectores concentrados de la economía para lucrar con una estrategia permanente de aumento de precios, lo que se ha dado en llamar la inflación oligopólica. Pero hay más: prácticas de evasión de todo tipo, impositiva, previsional, de incumplimiento de las regulaciones laborales, la fuga de capital, por supuesto, todas estas son formas de disputar el excedente. Ahora bien, los asalariados fortalecen mucho su propia capacidad de pelear por su parte del excedente cuando funcionan a pleno las convenciones colectivas de trabajo; en el marco de esa institucionalidad laboral, lo que en realidad el Estado está haciendo es fortalecer la capacidad de los sectores asalariados de disputar el excedente. Y eso fue el kirchnerismo: intervenir en el conflicto capital/trabajo de algún modo, dando lugar a las demandas de reivindicación de los sectores asalariados.

En parte, la puja distributiva explica también otras cuestiones, entre ellas los niveles inflacionarios. Hay que aclarar que no necesariamente da cuenta de los saltos inflacionarios, estos suelen estar explicados por otras razones, por ejemplo, un alza en los precios de las materias primas, condiciones de restricción de oferta en algún sector en particular, un shock interno o externo de cualquier naturaleza pueden generar un salto inflacionario. Lo que hace la puja distributiva es reproducir el conflicto sin reducir ese nivel de inflación, excepto que el Estado intervenga contra los trabajadores: cada uno de los planes de estabilización que ha habido en este país se ha basado en una intervención pública para reducir la capacidad de los sectores asalariados para disputar el ingreso. El kirchnerismo no hizo eso, más bien, en ese sentido, aguantó los trapos; por eso me parece que esa reforma estructural fue significativa.

Otra reforma estructural decisiva fue, sin duda, la estatización de las jubilaciones privadas. No solo porque volvió a otorgar capacidad retributiva al sistema de jubilación, no solo porque derivó los fondos que se gastaban en comisiones hacia pagos a los beneficiarios, no solo porque permitió multiplicar la cobertura del sistema, sino también porque en las condiciones particulares en las que se hizo el gobierno constituyó una especie de potente fondo contracíclico. Para que se entienda: Chile tiene un fondo contracíclico definido y constituido como tal, Brasil tiene un banco público de fomento que cumple esas funciones, el gobierno del Frente Amplio en Uruguay aplicó en algún momento una interesante reforma tributaria que le dio idéntica capacidad. Con la recuperación, con la estatización del sistema de jubilaciones, la Argentina se armó de un fondo contracíclico de

un modo totalmente heterodoxo, que fortaleció la capacidad de intervención del Estado con fines promocionales o compensatorios y que resultó muy útil en etapas con tendencias recesivas, como las de 2008/2009 y de 2012 en adelante, en las que a través de ANSES se financiaron programas de consumo, de vivienda y de terminación de estudios, entre otros. Lo que se hizo con esta reforma es multiplicar la capacidad de acción fiscal, que es una de las formas de intervención del Estado en el conflicto distributivo.

Ya en la segunda Presidencia de Cristina Kirchner, se agregaron otras reformas institucionales más o menos en la misma dirección. Una fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central emprendida en 2012 por Mercedes Marcó del Pont, quien estaba al frente en ese momento. No se trató de una reforma financiera integral, pero sí apuntó a recuperar cierta capacidad de orientación de la asignación de recursos por parte del sistema bancario, por un lado, y a flexibilizar en cierta medida las posibilidades de financiamiento del Banco Central hacia el Tesoro nacional, por el otro. También pueden mencionarse algunos cambios en el sistema energético, en particular la estatización de YPF y la introducción de mayores regulaciones en el mercado de la energía en general. Quizás con menor visibilidad, pero con similar importancia, puede considerarse el intento de reforma en la ley de competencia planteado por Augusto Costa como secretario de Comercio; en este caso, el propósito fue darle al Estado una mayor capacidad para regular el proceso de distribución y apropiación de rentas entre distintos eslabones de una misma cadena productiva. Dadas las características de nuestra estructura productiva, en la que conviven fracciones con poder de acumulación y de competencia fuertemente asimétricos y, por lo tanto, predomina la capacidad de algunos eslabones productivos de apropiarse en forma extraordinaria de rentas generadas por otros, distorsionando el proceso de competencia, esta reforma lucía muy necesaria.

Ahora bien, así como la estrategia de desendeudamiento, la nueva institucionalidad del mercado de trabajo y la estatización de los fondos de pensión fueron centrales para la evolución de la economía kirchnerista, tengo la impresión de que las reformas intentadas en la segunda Presidencia de Cristina Kirchner no alcanzaron a madurar en toda su expresión e intensidad y que sus potenciales beneficios y efectos no se desplegaron de manera adecuada. Es probable que la razón esté en el contexto fuertemente restrictivo y conflictivo que predominó desde 2013 en adelante.

Dicho esto, el punto que quiero subrayar es que, más allá que podamos considerar a estas medidas como reformas estratégicas, fueron, en cierto

sentido, respuestas más reactivas y esporádicas que parte integral de una estrategia deliberada de transformación del aparato productivo. Insisto con la comparación. Así como en la cuestión de derechos humanos creo que el kirchnerismo fue particularmente estratégico, para cumplir con el objetivo de “inclusión social”, en cambio, fue actuando reactivamente, es decir, reaccionando frente a las dificultades y las coyunturas que se iban presentando, pero al mismo tiempo confiando en que se trataba de un tema de crecimiento. Eso sí, siempre tendió a reaccionar para bien, en general haciendo sonar un tiro para el lado de la justicia, como se suele decir. Pero no consideró, no advirtió o no alcanzó el suficiente consenso interno sobre la necesidad de una estrategia, de un plan de desarrollo que propusiera y orientara el cambio en la matriz productiva.

Pienso que la hipótesis “oficial” que predominó durante buena parte de los gobiernos kirchneristas es que la resolución de los problemas distributivos de la Argentina era materia de crecimiento económico; que el crecimiento acelerado permitiría absorber la desocupación, reducir la informalidad y pavimentar la tendencia a una elevación sostenida del salario real, además de financiar otras coberturas sociales a través de políticas compensatorias específicas. Algo así como que el crecimiento era una condición necesaria y suficiente para resolver el problema de la distribución siempre y cuando fuera acompañado y promovido por políticas de expansión permanente de la demanda agregada. Asumiendo, creo que correctamente desde un punto de vista teórico, que la inversión privada resulta una variable dependiente de la expansión de la demanda, se procuraba en esencia fogonear la demanda agregada a través de distintos estímulos al consumo privado e incrementando la inversión pública. Por lo tanto, de acuerdo con esta hipótesis y más allá de algunos eventuales problemas asociados o derivados de coyunturas y factores internacionales, la expansión del mercado interno sería suficiente para asegurar el crecimiento sostenido, y con este, el cumplimiento del objetivo de la inclusión social y la equidad. Aquí es donde creo que falló el diagnóstico. Si bien la experiencia muestra que el crecimiento puede ser una condición necesaria para una distribución progresiva y que la expansión de la demanda puede ser una condición necesaria para estimular el crecimiento, también quedó claro que ninguna de ellas es condición suficiente para sostener el crecimiento y menos aún si existe la pretensión de redistribuir ingresos. La razón está en las mencionadas características de la estructura productiva argentina y su dinámica de reproducción.

Estamos frente a una estructura productiva que permanentemente reproduce heterogeneidades y desigualdades a todo nivel y que, por lo tanto, agrava el problema de la distribución primaria del ingreso, aquella que se resuelve en el marco del conflicto capital/trabajo dentro del sistema productivo. Así, el esfuerzo principal para gestionar el problema distributivo se traslada al segundo componente de la distribución, la llamada distribución secundaria o redistribución “política”, aquella que hace el Estado capturando excedente de algunos sectores y distribuyéndolo a otros a través de diferentes mecanismos y políticas. Por supuesto, el kirchnerismo así lo hizo, pero ahí también mostró sus límites. Mi hipótesis, y esta es una interpretación que va más allá del kirchnerismo y que creo que podría extenderse sin problemas a la gestión del PT en Brasil, es que estos gobiernos actuaron en particular sobre la esfera de circulación del excedente sin alcanzar a modificar las bases estructurales de su generación, y que esto tiene, a la larga o a la corta, un límite. Probablemente, esta hipótesis deba ser matizada en otros procesos populares en la región, tales como el venezolano, el ecuatoriano o el boliviano, en los que se instaló y desarrolló una nueva institucionalidad política.

Para concluir, diría que cuanto más heterogeneidades genera la estructura productiva y cuanto más redistribucionista se pretende ser, más pronto y con más dureza pueden aparecer aquellos límites; creo que esto es lo que fundamentalmente explica lo ocurrido del 2011 para acá en Argentina, al menos en la esfera económica. Pensando hacia adelante, nos queda pendiente la discusión de cómo y hacia dónde queremos orientar la matriz productiva; creo que estamos conscientes de la necesidad de cambiarla, pero al mismo tiempo muy lejos de tener un consenso sobre cuál debería ser su configuración. Sí sabemos que para intentar ese esfuerzo se necesita una enorme movilización social y política y una enorme capacidad de intervención estatal y que esto requiere, sin dudas, de reformas institucionales importantes. Solo por mencionar algunas, es poco probable que esa reorientación pueda hacerse sin una reforma financiera a fondo, sin una reforma tributaria a fondo y, creo yo, sin alguna reforma tendiente a un mayor control público de la oferta de divisas, por ejemplo, una mayor capacidad de administración del comercio exterior y los flujos de capital. Esto se dice fácil pero, aunque más no sea para tener presente la magnitud del conflicto en ciernes y del volumen de voluntades sociales requeridas para enfrentarlo, es bueno que recordemos la derrota política del kirchnerismo en la llamada “crisis del campo” en 2008 y sus secuelas.

SEGUNDA PARTE
**Grupos económicos, fracciones del capital
y dominación en la Argentina contemporánea**

El kirchnerismo y la ambivalencia de una reindustrialización fallida

Pablo Míguez

Nuestra propuesta para pensar el período es subdividirlo en varios momentos y después proponer alguna interpretación o cuestiones para pensar la relación entre el Estado y las fracciones del capital que estuvieron disputando la hegemonía en el período. Queremos también abrir algunas preguntas en relación con la renta financiera, o mejor dicho, con la lógica de las finanzas que está por detrás de la discusión sobre el cambio estructural, la matriz productiva y la estrategia industrializadora.

El primero es el período de la recuperación, el período 2002-2005. Algunos hablan de una “estrategia devaluacionista” de salida de la crisis. Fue el período que se caracterizó por ese tipo de cambio alto competitivo de la megadevaluación que supuso la salida de la convertibilidad. Fueron también los comienzos de un superávit importante –debido básicamente a la dificultad de importar– en el período 2002-2003. Esa gran dificultad permitió un superávit comercial, que se va a mantener durante 2002-2012. Una de las características de todo el ciclo de la economía mundial fue el aumento de los precios de los *commodities*, que favoreció a las economías latinoamericanas y a la argentina en particular. También en esos primeros años se dio un importante momento de superávit fiscal, sobre todo, a partir del no pago de los intereses de la deuda, que era un componente importante. Hay una inflación sumamente reducida, que no va a llegar al 10%, en el período 2002-2005, en ninguno de esos años, hasta que se recomponga la demanda un poco después. Tarifas pesificadas y congeladas, aumento leve

de demanda, y por supuesto, una cierta recuperación de la industria basada en la recuperación de esa capacidad instalada ociosa que había quedado del aparato productivo de la convertibilidad. Y un aumento de la inversión, sobre todo en el sector de construcción, en el sector residencial, en la obra pública. Esto último tironeó de esa demanda, absorbió parte del desempleo y en algún punto esto es algo que se desatiende; generalmente, la relación entre este sector, el empleo, el auge de algunos sectores menos estudiados, ligados a ciertas rentas que van a tener incidencia en los países desarrollados donde aparecen las crisis. Todo lo ligado a la renta inmobiliaria y a la renta financiera va aparecer tempranamente en este contexto de aislamiento financiero de la Argentina posdefault, pero después va a tener una dinámica sobre el final del período que por lo general es bastante desatendida. Por supuesto que subsiste la desconfianza hacia los bancos en los primeros períodos de la posconvertibilidad. Hay una retracción de esa actividad, pero de ninguna manera va a ser por la salida del default. La salida con los canjes de bonos, etcétera, van a reconstituir cierta dinámica de las finanzas y hay una cierta articulación de la lógica de la intervención del Estado entre distintos sectores, como el sector financiero o en el sector industrial, que es mucho más compleja de lo que suele pensarse.

El segundo momento es el momento del crecimiento a tasas chinas, que es el período 2005-2008. En 2005 se crece a más del 9%, en 2006 al 8,4%, en 2007 al 8% hasta el “conflicto del campo”. Ese período es, quizás, el mejor momento de la posconvertibilidad. También es el mejor momento de acumulación de reservas internacionales, algo que venía sucediendo desde antes. Pero recuerden que en el 2001 las reservas cayeron a menos de 10 mil millones de dólares y estamos hablando de que en 2005 están cerca de los 30 mil y en el 2008, durante el conflicto del campo, están en 46 mil millones de dólares, una cifra bastante considerable. No había sido pensada una recuperación tan rápida si nos situamos en el año 2002. En ese período 2005-2008 es cuando comienzan las discusiones sobre el modelo productivo. Todas esas discusiones estaban en suspenso hasta que no se cerró la cuestión de la reestructuración de la deuda externa en 2005. Esa circunstancia se resolvió en términos capitalistas, pero de alguna manera fue un punto de quiebre. Ese cierre habilitaba ese período 2005-2008, cuando la pregunta empezaba a ser “¿ahora para dónde vamos?”. Se hablaba ahí de cuáles son los modelos posibles, se hablaba del modelo de crecimiento con inclusión social, la discusión sobre el modelo productivo, como si hubiera ahí una estrategia posible de ser desplegada. Por supuesto, la estrategia

que defiende el gobierno –al menos retóricamente– es la de una industrialización que sería la continuación de un proceso que se vio interrumpido en 1976. El problema no era que estaba mal pensar en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), sino pensar que ese proceso fue interrumpido y ahora estaban dadas las condiciones para retomarlo como si no hubiera habido una transformación radical de la economía internacional en esos treinta años. Se leía el contexto descuidando aspectos centrales del capitalismo contemporáneo, como si no hubiera cambiado la lógica de valorización del capital desde un capitalismo industrial hacia un capitalismo basado en la valorización del conocimiento y en la hipertrofia de las finanzas.

Simultáneamente en Brasil, con el auge del neodesarrollismo, hay un clima favorable a la discusión no sobre qué tipo de capitalismo o de inserción en la economía mundial es posible, sino sobre qué fracción del capital se puede promover desde el Estado. Antes decía Fernando Porta que había una estrategia de cambio de la matriz productiva, la idea asociada a una serie de encadenamientos positivos de la industrialización, la idea de la creación de empleo sinónimo de expansión de la demanda agregada, sinónimo de absorción del desempleo y toda una serie de circunstancias positivas que hacían pensar que con el contexto internacional favorable era un momento propicio para impulsar esa estrategia.

Al mismo tiempo que existe ese crecimiento de la demanda, aparecen quienes defienden esta estrategia y quienes la defienden desde un lugar más o menos crítico y viendo los problemas que se empiezan a señalar. Martín Schoor hablaba del artículo de Fernando Porta de 2007, la idea de que todavía no había un cambio estructural. Lo que había era una recuperación de la capacidad instalada, que no estaba usándose de manera plena y ahora que sí está usándose plenamente había que generar inversiones y es acá donde aparece la reticencia inversora. Porta decía: "... todavía no hay cambios estructurales, no hay cambio estructural, crecemos a tasas chinas pero cuidado que para nuestra pretensión todavía falta". Quizá desde el ala política esto todavía no era leído como un problema, había un cierto optimismo, los indicadores alentaban a pensar un poco más allá. Por ejemplo, Porta habla de que no tenemos cambio estructural, Schoor habla de que esa ISI que se propone hacer en realidad es una sustitución inversa. El problema de la industria es que es deficitaria en términos de divisas por los insumos importados. No es una reestructuración de la industria, no hay una política industrial adecuada a esa estrategia. O mejor aún, aunque

existen múltiples políticas e iniciativas, la política industrial desplegada se muestra descoordinada de las de ciencia y técnica y con un bajo impacto en la productividad.

Antes de que esto empiece a mostrar signos de deterioro a raíz del conflicto del campo, o mejor dicho, desde el 2008 en adelante, a raíz de problemas propios de la estrategia de industrialización de sustitución de importaciones, ahí uno puede preguntarse si era posible adjudicarle a ese proceso todas las virtudes que pensaban que traían asociadas.

¿Qué quiero decir con esto? Primero, la idea de que esa mediación que propone el gobierno entre las fracciones del capital era deliberadamente a favor de la industria y en contra de las otras fracciones es muy discutible. Si vamos al sector de las finanzas, la propia salida del default reconstituye también la dinámica de la acumulación financiera, por más que estos sectores no le van a responder ni van adherir al programa del gobierno por el solo hecho de reconstituir sus bases de acumulación. Después de la pesificación asimétrica el Estado va a pagar con bonos a los bancos, bonos que se pagaron puntualmente. Según los trabajos que tenemos de algunos colaboradores del Instituto de Industria, Alan Cibils y Cecilia Allami, que trabajan sobre el sector financiero, las ganancias del sector financiero desde el 2005 hasta ahora estuvieron cerca o fueron incluso mayores que en los años noventa. Eran ganancias vinculadas al crédito al consumo, por supuesto, lo que de alguna manera generó que en el momento de la estatización de las AFJP finalmente no hubiera habido tanta resistencia de este sector. Al sector de las finanzas no le iba nada mal con el crédito al consumo, tampoco articulando la lógica del endeudamiento de los sectores populares con esta estrategia. Todo esto, que todavía parecía ser una mediación compleja que venía haciendo relativamente bien en 2008, con el conflicto agrario va a encontrar un punto de no retorno. No porque no haya seguido habiendo crecimiento y acumulación –en 2009 continuaba el crecimiento hasta el 2010-2011–, sino porque ya no era lo mismo esa mediación compleja que pretendía realizar el kirchnerismo entre estas fracciones. Ya no va a estar convalidada desde los sectores dominantes, no porque lo hubieran estado haciendo antes, sino porque hasta ese momento no había quién pudiera encargarse de esa mediación. El kirchnerismo lo hizo y creyó poder conducirlo a favor de la fracción industrial mercado-internista en desmedro de las demás. Y las otras fracciones, dado el contexto que no era para nada simple, fueron apoyando o al menos no buscaron –ni querían– impugnarla.

En el conflicto del campo esa relación se quiebra. La resistencia de los sectores agrarios al aumento de las retenciones va a cambiar de manera definitiva el porvenir de esa lógica de mediación del Estado con las fracciones del capital, que de todas maneras va a quedar simulada por la continuación del éxito de la acumulación. Incluso el gobierno va a continuar teniendo la iniciativa política, avanza con la ley de medios, la asignación universal por hijo, a pesar de la derrota en las legislativas de 2009. De hecho ese período, que termina en el 2011 con la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, es un período en el que ya hay un aumento de la inflación importante. Estamos hablando de que en 2008 tenemos una inflación importante, creo que cercana al 27%, y en 2009 es del 15%. Pero ya después del 2010, 2011, 2012 está por encima del 20% de manera permanente. Esto habilita a decir que los niveles del conflicto distributivo son altos, que la puja entre capital y trabajo se mantienen a niveles altos y que solo los saltos son lo que hay que estudiar. Ya teníamos una caída de la inversión o al menos una reticencia inversora evidente, un aumento de la fuga de capitales que tiene un máximo en 2011 y el fin de los superávit gemelos (superávit fiscal y de la balanza de pagos).

Algunos van a señalar el problema de la reaparición de la restricción externa. A mí me parece que ahí hasta en el 2011 esta fuga que fue muy fuerte (aproximadamente 21 mil millones de dólares y 4 mil millones de remisión de utilidades en el año 2011) de todas formas no hizo bajar tanto las reservas. Porque también el saldo exportable era importante. Pero generó una señal de alarma habilitada por la utilización del cepo cambiario, ese cepo cambiario que se instaló ni bien fue electa Cristina Kirchner y que condicionó bastante todo su segundo mandato. De hecho, las tasas de crecimiento de ese período son débiles (en 2011 se creció más del 8%, pero ya 2012, 2013, 2014, 2015 son años de estancamiento), incluso son años de una gran caída de las reservas (en 2011 estaban en 46 mil millones de dólares, va a terminar en 2013 en 30 mil millones y a esa velocidad, con un gran susto de que bajen todavía más). En parte, la devaluación en enero de 2014 responde a la gran diferencia del dólar oficial con el paralelo, porque también teníamos el ascenso del “dólar blue”, que se estaba yendo al doble del precio oficial. Y ahí es cuando de alguna manera hubo que salir a intentar frenar ese avance del dólar blue en enero de 2014 con una devaluación y con suba de la tasa de interés del 30%, que acentúa aún más ese momento recesivo del cual nunca se volvió a salir. Aparecen los controles cambiarios mucho más fuertes, por supuesto, después del 2011 y el crecimiento del dólar paralelo,

el aumento de las importaciones de energía, la necesidad de búsquedas de capitales en algún otro lado, nos llevan al último año con el intento de los pagos a los acreedores del Club de París, el intento de cerrar, terminar con esa reestructuración de la deuda que había quedado en 2015, lo que lleva al conflicto con los fondos buitres. El gobierno no esperaba nunca tener ese conflicto, pero después de alguna manera lo sostuvo en el tiempo por otras razones. Y entonces tenemos un período 2011/2015 de estancamiento. De este estancamiento se va a salir, de alguna manera, ajustando. El hecho de que finalmente no ocurrió ante la derrota, por más que sea con el 1%, por más que con el avance de las fracciones del otro proyecto que se terminan constituyendo o recreando después.

Teniendo capacidad política de imponerse después de la crisis del campo, no había una articulación “por derecha” que pudiera disputarle al kirchnerismo el control sobre ese arbitraje. La pregunta es hasta dónde tuvo, hasta dónde tenía posibilidad de éxito este intento de mediación que era muy compleja ante esta fracción del capital. De alguna manera intentó apropiarse de una mayor parte de la renta agraria, lo que no se pudo conseguir, y se intentó estimular la ganancia industrial para contrabalancear. Uno diría más desde el punto de vista de los defensores de la estrategia industrializadora que lo que había que buscar era, justamente, trascender y obtener rentas tecnológicas, rentas de la innovación, hacer ese cambio estructural. Pero por problemas ajenos y propios, ahí hay que discutir si es que no se pudo, no se supo o no se quiso. Eso no lo sabemos, pero el hecho cierto es que eso no sucedió. Lo que sí sucedió fue un “dejar hacer” a la renta minera, avalar una renta financiera a la que no se aplicaron restricciones ni impuestos y cierta ignorancia respecto de los efectos de la renta inmobiliaria.

Hemos visto en las economías desarrolladas que esto tiene un lugar importante, ya que el crecimiento de las finanzas siempre ha tenido como prolegómeno alguna burbuja inmobiliaria. Yo no quiero decir que esto era lo que sucedía en la Argentina porque por un lado esto, el valor de la propiedad inmobiliaria, es algo que alcanza los precios en dólares de 2001 recién en 2006 y después se detiene en el cepo del 2011. Si se analizan estos sectores, vamos a ver que distintas fracciones del capital están mucho más entrelazados de lo que parecen sugerir esta distinción entre fracción agraria, fracción industrial. Casi todas estas fracciones tienen un negocio paralelo relacionado con las finanzas. El hecho quizá de que estemos tan acostumbrados a analizar esto como una cuestión entre agro/industria es

parte de la historia económica argentina, del desempeño que tuvieron esos sectores hasta los años setenta. Pero desde los años setenta en adelante la dinámica del capital global y de la economía mundial pasan por las finanzas, no porque esto tenga menor envergadura, sino porque tiene una incidencia determinante y no es solo una cuestión que sucede en los países centrales.

Cuando se habla de las dificultades, la referencia es, por ejemplo, para tener una política fiscal razonable, para cobrar impuestos. Hace ya tiempo que los países que en su momento tuvieron sistemas tributarios robustos, funcionan a partir de la deuda. Emiten deuda como forma de financiarse y no digo que esto esté bien, simplemente que es así como sucede. En la actualidad, para bien o para mal, los Estados se financian con deuda, no con impuestos. No pueden cobrar impuestos para no erosionar la competitividad de sus capitales. De todas formas, eso no habilita a que uno no tenga la intención de hacerlo. Ahora que tenemos la convicción de que esta estrategia impulsada de recuperación del empleo vía industrialización, etcétera, por las razones que sean no pudo funcionar, quizá sea hora de pensar cómo esto está articulado con otras fracciones del capital, que no son las que caracterizan el antagonismo más directo entre capital y trabajo, pero que participan inevitablemente de él. A la restricción externa financiera no la hemos pensado del todo y la cuestión del condicionamiento que ha tenido el dólar en estas dinámicas o el tipo de cambio en esta dinámica de la acumulación. No solo porque es la divisa clave del mercado mundial, sino porque en la Argentina los ahorros se hacen en dólares desde hace treinta años. Y esto ni siquiera se lo planteó en la agenda el kirchnerismo, esto es, la posibilidad de que la reserva de valor sea el peso. Uno podría decir: “bueno, era utópico”; pero si no se hacía en este contexto, me pregunto entonces cuándo se podía hacer.

Entiendo que son sectores son muy complejos y bastante opacos. Me parece que hay cierta desatención a su dinámica porque si no son ellos los que estructuran el centro de la acumulación, no van a ser percibidos como centrales. Pero cuando se hablaba del conflicto del campo, del rol de los *pools* de siembra, su estrategia era centralmente financiera. La articulación de algunas fracciones del capital con la dinámica de las finanzas es algo que debería estudiarse con más detalle. Aunque otras economías latinoamericanas que atravesaron procesos similares tampoco lo han hecho. Por ejemplo, Brasil, que uno lo tiene como el ejemplo de una verdadera burguesía nacional e industrial pujante, etcétera, también se enfrentó con estos

problemas. Brasil también estimuló la renta inmobiliaria y financiera. ¿O qué fue, si no, el impulsar los juegos olímpicos, los mundiales y toda esta dinámica, asociada a la valorización del espacio urbano, al crecimiento de la renta financiera? Porque es renta inmobiliaria, renta financiera; son los sectores impulsados por la derecha, sobre todo. Cuando uno habla de la desigualdad del ingreso, que mejoró, por supuesto, en el periodo kirchnerista, olvida que lo paradójico es que la desigualdad patrimonial empeoró. Piketty nos comenta esto de la desigualdad patrimonial. La desigualdad patrimonial es algo que ha aumentado y esto es lo que hace aún más complicado un proceso, si se quiere, de redistribución. Esa desigualdad patrimonial aumentó y si uno pretendía mejorar la distribución del ingreso, eso es una dificultad insalvable que pasó desapercibida.

Cuando Martin Schoor señalaba que tenemos que habilitarnos discusiones, podemos aprovechar de la experiencia reciente –esto es, la discusión de una estrategia industrializadora como forma de generar empleo– y ver que en el mundo no sucede. En el mundo la industria no está teniendo la capacidad de generar empleo. O sea, no digo que no haya que tener una estrategia de industrialización, simplemente que no se le puede poner todas las fichas a algo que se le atribuye un efecto mayor que el que está mostrando tener en el capitalismo contemporáneo, que es un capitalismo cognitivo y financiarizado. El sector produce cada vez con menos fuerza de trabajo, por más que podamos encontrar casos de países que hacen uso intensivo de la fuerza de trabajo. Pero no necesariamente podemos asociar industrialización con absorción de grandes masas de fuerza de trabajo.

Otro tema es el potencial de la ISI en el marco de una economía global. Las políticas nacionales centradas defendían la idea de que estas podían emanciparse más del capital global. Aparecieron los límites por el lado de la fuga de capitales, la restricción financiera externa, entonces, ¿hasta dónde te da margen esa dinámica del capital global para ser exitosos en esa estrategia pretendida por el kirchnerismo? La apuesta del gobierno de encadenar la estrategia industrializadora a toda una serie de eventos que generaría un círculo virtuoso tenía cierta lógica cuando fueron pensadas en los años setenta. Y se intentó reproducir esa estrategia como si el contexto mundial se hubiese mantenido sin grandes cambios desde ese período a la actualidad. Por supuesto que no fue así, que la economía mundial cambió radicalmente, lo que agregaba más dificultades que no fueron del todo atendidas. Señalo esto no para cargar tintas contra una estrategia, sino simplemente para mostrar que este capitalismo contemporáneo está

signado por una mayor complejidad. Alcanzaría para ver, por ejemplo, el hecho de que incluso las explicaciones sobre la inflación también pueden estar ligadas a cierta lógica de inflación de los valores activos. Y muchos de esos son activos físicos, inmuebles. El precio de los inmuebles condiciona los alquileres, condiciona los precios de los servicios, que son a veces menos destacados que los aumentos de los precios convencionales.

En los casos de los países desarrollados donde hubo crisis financieras, todos tendieron posteriormente a ciertas crisis por el lado de burbujas especulativas, asociadas a veces a la especulación inmobiliaria. La cuestión de la dinámica financiera inmobiliaria no tiene todavía el peso que podría tener en la explicación de la crisis de ese régimen de acumulación. Y no solo en la Argentina, también me parece que en Brasil y en otros países latinoamericanos es muy importante. No porque eso sea el centro ni lo único, pero es algo que genera complejidad adicional. Hay que ver cómo lo pensamos y lo incluimos en el análisis, porque la economía mundial de los setenta en adelante tiene la dinámica de la reestructuración capitalista de los setenta, la de la fragmentación global de la producción, pero también la de una hipertrofia de las finanzas que todavía no fue resuelta. La crisis financiera del 2008 data de toda una dinámica de la acumulación global de los ochenta en adelante. Y bueno, no estamos afuera de esa dinámica. Por más que nos mantuvimos excluidos por cierto aislamiento de esos mercados financieros después del default y hasta el momento en que quisimos volver a insertarnos, y en el nuevo gobierno ese es un objetivo central, precisamente por eso hay que ver cómo funciona.

La élite empresarial durante el kirchnerismo

Alejandro Gaggero

El eje de lo que quería decir es un poco más específico de lo que se viene diciendo acá, pero me parece que puede dialogar y puede aportar algo a la cuestión de si hubo o no una hegemonía kirchnerista, y en todo caso, si es que hubo, por qué cayó. Y básicamente la presentación se centra en un actor central en el proceso de acumulación y en la política en la Argentina que es la élite empresarial o la gran burguesía.

Con Ana Castellani escribimos un trabajo que busca trabajar dos dimensiones de esta élite. En primer lugar, una dimensión más estructural que tiene que ver con la conformación de la élite, es decir, ver para la pos-convertibilidad, para el período 2002-2015, cómo varió la conformación de este gran empresariado en la Argentina. Y nosotros lo hicimos a través del análisis de la cúpula de las doscientas empresas que más venden del país. Esto nos permitió estudiar algunas variables, como las actividades en las que están insertas estas empresas, cómo evolucionan sus ventas, sus utilidades, el origen del capital, etcétera. En ese sentido nosotros sistematizamos una serie de trabajos que se vienen publicando sobre eso, incluso uno que hicimos con Martin Schorr y otros más. Y esa es una dimensión que nos parece interesante, en parte porque habla sobre lo básico del actor, sobre sus intereses, y tiene un correlato sobre el posicionamiento político que va a tener.

La otra dimensión que analizamos es tratar de ver más puntualmente la dimensión política, es decir, ver a esta élite empresarial como un actor

político. Y esto es complejo porque en la Argentina no hay una representación unificada del empresariado (y esto es tradicional). Decidimos centrarnos en un actor específico, en la AEA, la Asociación Empresaria Argentina. Nos resultó interesante porque fue una organización que se creó en 2002, buscando representar a las empresas más grandes del país, en la que los empresarios nacionales que sobrevivieron tuvieron, en general, la presidencia de la organización y porque tuvo una relación no lineal con el gobierno; pasó de un apoyo cauto a una oposición abierta al final del kirchnerismo. De hecho, uno puede decir que fue uno de los actores que buscó tejer lazos con otros sectores sociales o sectores políticos para oponerse al gobierno y en algún momento casi apoyar abiertamente la candidatura de Mauricio Macri.

Me centro primero en la cuestión estructural: qué pasó con la élite empresarial en estos años. Uno podría decir que la élite empresarial tuvo puntos de continuidad en su formación durante la posconvertibilidad. ¿Continuidad con respecto a qué? A los rasgos que había tenido en la década de los noventa, un período de fuerte transformación de esta élite y otras cuestiones que tienen que ver con rupturas, con cambios. Voy a hacer un poco esquemático en esto. Una primera continuidad con los noventa tiene que ver con el nivel de extranjerización; en la década de los noventa aumentó muchísimo la extranjerización empresarial, ¿esto qué quiere decir? La importancia de empresas transnacionales en la cúpula empresarial y la década de la posconvertibilidad fue una década en la que, si bien no hubo un aumento sustancial, quedó en niveles altos y esta evolución no fue pareja en todo el período. Los primeros años de la posconvertibilidad, los “años de oro”, la extranjerización aumentó todavía más y en el período 2008-2015 tendió a moderarse. Si uno ve el nivel, se mantiene bastante estable en el tiempo, esto es un dato. El rol que tiene el empresariado extranjero en la élite.

La otra cuestión tiene que ver con los niveles de concentración empresarial: esos niveles no se redujeron sustancialmente y en algunas actividades incluso se incrementaron. ¿Con qué tiene que ver esto? Algunas cuestiones que exceden a la Argentina que tienen que ver con dinámicas globales. Pienso en el mercado de la cerveza está hiperconcentrado y tendió a hiperconcentrarse y eso tuvo implicancias en la Argentina, pero también factores locales vinculados a qué política hubo o dejó de haber para poder moderar estos procesos, como por ejemplo, el rol de la Comisión Nacional de la Competencia.

La tercera cuestión tiene que ver con que el crecimiento de la industria que hubo en la posconvertibilidad no implicó un cambio estructural en el perfil de la industria, y esto va a tener algunas consecuencias sobre todo en el período de declive económico, en el que vuelve la restricción externa.

Y la cuarta tiene que ver con la continuidad de ámbitos, de lo que Ana Castellani llama “ámbitos privilegiados de acumulación”. Vale decir, de rentas extraordinarias del sector público que asegura al sector privado sin necesidad de fuertes inversiones ni innovación, etcétera. Esto que hoy está en la tapa de todos los diarios vinculado a la obra pública durante el kirchnerismo. Hay trabajos que muestran que no es un factor coyuntural de esta etapa, sino que viene como una herencia de décadas. Bueno, uno podría hablar de que hubo una continuidad de esos espacios. Y esos espacios fueron importantes sobre todo para la renovación de una parte de esta élite empresarial.

Esto debe considerarse como las principales líneas de continuidad. Hay dos líneas de rupturas que a nosotros nos parecen interesantes de pensar porque tienen algún matiz. Uno está relacionado con que si se analiza la cúpula empresarial ve un cambio en las actividades a las que le van mejor y las actividades que les va peor. Y hay una cuestión –que está vinculado con lo que se viene diciendo– y es que hay una importancia de la actividad industrial dentro de la cúpula. Es decir, las empresas industriales tienen una mayor importancia comparada con la década del noventa y como contracara a las que les va relativamente peor, que son las empresas del sector servicios. Dentro del sector servicios, servicios públicos, y esto tiene que ver con la política, en parte, de congelamiento de las tarifas, etcétera. Este es un primer rasgo que hay un cambio. Y hay un segundo rasgo que también es importante y es acerca de lo que sucedió en la última parte del gobierno kirchnerista, que es el crecimiento de las empresas públicas como un actor importante en la cúpula empresarial. Y esto se ve en dos cuestiones: una, empresas que fueron nacionalizadas y que pasaron a ser empresas estatales. Pienso en Aerolíneas, en Correo Argentino. Si bien en estos dos casos no tienen tanta importancia, a partir del 2012 hay una empresa que sí tiene mucha importancia con lo que pasa con la cúpula, que es YPF. Pero YPF no es enteramente estatal, sino que es una asociación estatal-privada. Bueno, hay muchas empresas que no son enteramente del Estado pero que son asociaciones en las cuales el Estado tiene la dirección, eso también es un cambio, bastante relevante. Pensemos que YPF es la empresa más grande del país desde hace muchísimo tiempo.

Entonces, si uno puede hacer un balance de largo plazo diría que las continuidades fueron muy importantes y se puede hacer la conexión con los problemas de restricción externa que van a aparecer en distintos aspectos. Me parece importante también el tema de la concentración y el efecto que tiene la concentración de las exportaciones de la Argentina en pocas empresas. Vale decir, el poder que le da a esas empresas exportadoras en una variable que es fundamental para el país. Pero en términos generales, cuando uno ve el perfil de la cúpula, observa que no hay un cambio estructural; no hubo una “guerra” contra el perfil anterior, sino más bien uno puede entender algunos cambios pero con muchas continuidades.

Nos parecía interesante complementar este análisis con lo que sucede a nivel político. Y ahí nosotros tomamos una decisión: estudiar a la AEA. La AEA tiene algunas particularidades que son interesantes. En primer lugar, es la heredera del Consejo Empresarial Argentino. El Consejo Empresarial Argentino era una organización más o menos informal del empresariado que buscaba reunir a las empresas más importantes del país sin importar de qué sector fueran. La Unión Industrial representa al sector industrial, la Sociedad Rural representa el sector agrario; estas asociaciones reúnen de todo, entonces le dan una idea al poder económico en sus distintas actividades.

La AEA se crea en el 2002, en plena crisis, en parte como un heredero del Consejo Empresarial Argentino. ¿Qué particularidad tiene? Representa distintos sectores de actividad y los integrantes de concejo directivo, a diferencia de lo que pasa con otras asociaciones empresarias, son los presidentes de las empresas, o sea, que los que participan en la toma de decisiones son los presidentes, en buena parte, los dueños. Y la otra cuestión es que es una asociación en la cual la presidencia siempre la ocupa un empresario argentino. Entonces, estos rasgos la transforman en un objeto de estudio interesante porque una sola asociación representa “la crema” del poder económico en sus distintas actividades.

¿Qué es lo que hicimos para este trabajo? Relevamos las intervenciones públicas de esta asociación a lo largo de todo el período kirchnerista y lo que vimos es que no fue una posición linealmente opositora, sino que hubo grandes giros frente a la postura de las políticas estatales. Y es interesante porque la periodización que nosotros hacemos coincide, en gran medida, con las periodizaciones de lo que sucedió con el modelo económico kirchnerista y la performance de la economía y en buena medida con la performance de algunas variables sociales.

¿Qué es lo que nosotros vemos cuando analizamos la etapa? Que hay un primer período del gobierno kirchnerista, que es 2003-2007, en el que apoya el desarrollo general de la política económica y algunas medidas en particular y cuesta encontrar críticas abiertas al gobierno. Y fíjense que cuando uno ve la conformación de la AEA, ve que los personajes, las figuras centrales, tienen una trayectoria política bastante alejada de la que tiene el gobierno en muchas áreas. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos, o incluso de lo que es política económica en general, yo creo que hay un sesgo en el análisis del empresariado que consiste, primero, en verlo más homogéneo de lo que es en realidad, con una orientación política unívoca y con una identidad política ideológica bastante cerrada. Yo creo que esas dos cuestiones hay que relativizarlas, la élite empresarial, o sea lo más concentrado, es más heterogéneo no solo en cuanto a las actividades en las cuales se desempeña –esto es algo que ya se viene analizando en la sociología y en la economía desde hace mucho tiempo–, sino incluso en la trayectoria social, en el origen social y en la orientación ideológica. Es decir, Franco Macri y Santiago Soldati o Luis Pagani tienen perfiles bastante diferentes. O Jorge Born. A lo que voy es que si bien estas diferencias eran evidentes, en la primera parte había un apoyo. Ese apoyo está vinculado con el desarrollo que tiene la economía argentina y su capacidad para reactivar la actividad en distintos sectores. Incluso una parte de los reclamos que hace la AEA en el 2003-2007 no son victorias. De hecho, uno de los primeros reclamos de la AEA fue la estatización de la deuda externa privada, algo parecido a lo que sucedió con Martínez de Hoz. De hecho, lo que pidió inicialmente fue un seguro de cambio. Esto no sucedió y sin embargo, el recorrido que tuvo la Argentina en esos primeros años implicó un fuerte apoyo de la AEA, o al menos no mostraba un conflicto abierto.

¿Cuándo cambia esto? Entre 2008-2011 nosotros vemos otra etapa. De nuevo, analizando básicamente los posicionamientos y esa etapa es una etapa sin decreciente confrontación con el gobierno. ¿Cuándo se inicia esa etapa? Con el conflicto con el campo. Hay dos cuestiones que son bastante centrales, el conflicto con el campo y la estatización de las AFP. Ahí ya empieza a haber críticas. Pero hasta el 2010 son críticas bastante moderadas teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo, críticas a la orientación de la política, y de esto la cuestión que me parece interesante es si nosotros vemos estas etapas que identificamos. El 2007-2008 coincide con el primer pico en la fuga de capitales. Es decir, si uno analiza la fuga de capitales en Argentina, observamos que los primeros años la fuga es muy baja o casi

nula; hay un primer pico en 2008 que es de 20 mil millones de dólares y luego en el 2011 hay otro pico. Bueno, esta primera etapa se inicia con el conflicto con el campo y coincide con un pico en la fuga de capitales. A mí el pico de 2008 me parece fascinante. Porque es un pico que se da en un contexto económico bastante favorable para la Argentina y que difiere bastante de otros picos de fuga que se dieron en otras etapas históricas; y los picos de fuga tradicionales de la Argentina coinciden, en general, con procesos de apreciación cambiaria muy fuerte. En 2007-2008 esto no sucedía, en 2011 algo de eso sucedía. Pero 2007-2008 es un pico en el que uno tiene que entender lo que estaba pasando a nivel político y a nivel de conflicto, digamos, social, me parece para entender ese pico. De hecho, cuando uno analiza quiénes son los que fugan, en la fuga del 2007-2008 el componente de los grandes fugadores es mucho más importante que en el 2011. ¿Por qué? Porque en 2011 ya estaba jugando la clase media, ya que se estaba esperando una devaluación. Entonces, esta segunda etapa se inicia con conflictos con la patronal, si se quiere, y con esta fuga de capitales.

Sin embargo, el distanciamiento no es inmediato; es muy fuerte el cambio en el tono de las críticas, luego de que el justicialismo perdiera las elecciones de medio término. Y esa es otra característica que nos pareció interesante para entender el alejamiento del empresariado. No tanto el alejamiento, sino el aumento en la combatividad. Hay que mirar dos cosas; primero, lo que el gobierno empieza a ver en cuanto política económica y la intervención del Estado que crece, eso por un lado: pero por otro lado, los momentos de debilidad del gobierno. En general, la combatividad empresarial aumenta cuando el gobierno está en situaciones de debilidad, cuando pierde elecciones de medio término. Eso pasó a partir del 2010. En 2010 aumenta esto, pero hay una paz que se genera con la muerte de Néstor Kirchner y en el 2011 empieza esta tercera etapa que nosotros llamamos ya de oposición abierta del gran empresariado al gobierno. De nuevo, en 2011 coincide el otro gran pico de fuga de capitales con la elección presidencial de Cristina de Kirchner, y lo que vemos es que buena parte de los reclamos empresariales van a cuestionar las políticas que cada vez más tienden a intervenir las decisiones microeconómicas de las empresas. Desde la injerencia de los directores estatales que vienen de la participación de la ANSES. O sea, las principales empresas de la Argentina tienen una participación que es de la ANSES: cuando se estatiza la ANSES, esos representantes de la ANSES en los directorios de las empresas pasan a ser representantes estatales. Bueno, esa es una medida que genera problemas. Otra medida que genera

problemas es la Ley de Medios. Otra medida que es un problema y un conflicto es la estatización que hace Chávez de la subsidiaria de Techint. Pero sin duda una cuestión central acá tiene que ver con la nacionalización de YPF, que también marca un salto en las críticas empresariales. Con las reformas de los mercados de capitales sucede lo mismo.

Este sector empresarial no solo pasa a ser un actor que realiza críticas que tratan de mostrar una oposición, sino que a partir del año 2012 empieza a articularse junto con otros actores. Actores del empresariado y actores fuera del empresariado, por ejemplo de la Iglesia católica, o referentes de la oposición. Y a partir del año 2013 ya la oposición es abierta y bastante fuerte. Ahí los lazos con el gobierno ya se habían roto definitivamente, y lo que pasa es que la AEA comienza a organizar un actor que empieza a tener voz los últimos años del kirchnerismo, que es el Foro de Convergencia Empresarial, un foro donde convergen distintos actores empresariales y se articulan políticamente con otros actores. Ahí ya la oposición es total; y lo interesante, analizando el largo plazo en la Argentina, es que no es tan usual ver al gran empresariado organizándose en una institución nueva y que tome la ofensiva, porque esto es lo que sucede en los últimos años. Es un empresario que no solo resiste lo que considera las políticas intervencionistas del gobierno, sino que toma una ofensiva y ya empieza a tomar algunos puntos de posible agenda del reemplazo del kirchnerismo, y la toma deportiva por los candidatos de la oposición es abierta. Y de nuevo acá es una cuestión que no es tan común ver en el empresariado, por lo menos de la forma orgánica que se vio, que es el establecimiento de puentes para, básicamente, debatir sobre la hegemonía.

Acumulación y dominación en la Argentina reciente

Alberto Bonnet

Quisiera abordar el tema de la relación entre “hegemonía” y “economía” entre 2000 y 2015 de una forma un poco diferente, tratando de comparar la manera en la que se articuló el modo de dominación política típicamente neoliberal del menemismo, por una parte, y la manera en la que se articuló el modo de dominación política que podríamos denominar como “neopopulista” del kirchnerismo, por otra parte, con el modo de acumulación vigente, o sea, a través de un ejercicio comparativo, por dos motivos. En primer lugar, porque este tipo de ejercicio comparativo permite poner en evidencia más fácilmente las especificidades del kirchnerismo, a las que en especial quiero referirme. Pero además, en segundo lugar, por el hecho de que fue del derrumbe del primero, del derrumbe del modo de dominación característico del menemismo, que surgió en este nuevo modo de dominación del kirchnerismo.

Primero, brevemente: ¿a qué me refiero con esto de modo de dominación, de las características del modo de dominación durante el menemismo y el kirchnerismo? En el caso del menemismo, como decía, se trata de un modo de dominación de características neoliberales bastantes típicas. Por esto quiero decir, ya que no hay consenso sobre este punto, que era un modo de dominación sustentado básicamente en el disciplinamiento de mercado de la clase trabajadora o, si se prefiere, de la clase trabajadora a través del disciplinamiento de la propia burguesía, mediante instrumentos fundamentalmente monetarios-financieros. Esta es una característica

general del neoliberalismo, tanto en la Argentina de Menem como en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, etcétera. En la Argentina de Menem, este mecanismo de disciplinamiento monetario-financiero adquirió cierta especificidad debido a que descansó en la convertibilidad de la moneda, que era una rareza a escala mundial. La convertibilidad fue ese mecanismo de disciplinamiento monetario. Y este mecanismo fue acompañado y reforzado por el endeudamiento externo, es decir, por las sanciones adicionales que implican los flujos y reflujo de capital-dinero a través del endeudamiento externo, algo que no es tan raro, sino que es característico del resto de América Latina y de otras regiones.

El disciplinante en última instancia, por supuesto, es siempre el mismo: el mercado mundial, la apertura de la economía doméstica al mercado mundial. En la Argentina esto implicó, brevemente, la supresión del recurso clásico en materia de política económica de la devaluación competitiva. Esto significaba hacer depender la inserción exitosa de la economía doméstica en el mercado mundial, la competitividad, de una manera directa, sin mediaciones, en los niveles de explotación del trabajo, en la tasa de plusvalor, sustentados en las fases de ascenso del ciclo por los aumentos de la productividad del trabajo, reconversión del aparato productivo mediante, y en las fases de descenso del ciclo a través de la contención, e incluso la reducción, del salario en términos nominales. De esta manera brutal funcionaba ese mecanismo de disciplinamiento en los noventa, la versión doméstica de los mecanismos de disciplinamiento que sustentan toda construcción hegemónica neoliberal. Este mecanismo apuntó, en la Argentina, a ponerle fin al modo inflacionario de desenvolvimiento de la lucha de clases que había caracterizado a la Argentina de posguerra. Me refiero a las pujas distributivas a las que hacía referencia Porta en la mesa anterior, pujas que descansaban, por supuesto, en la significativa capacidad combativa de la clase trabajadora argentina. Estas pujas distributivas fueron “suspendidas” en los noventa mediante la implantación de la convertibilidad.

Pero al punto al que más me interesa llegar es el siguiente: aun cuando este modo de ejercicio de la dominación política tuviera como respaldo último un férreo disciplinamiento del mercado, aun cuando en su origen se encontrara una violenta modificación de la relación de fuerzas sociales a través de los procesos hiperinflacionarios que le dieron origen entre el 89 y el 91, a pesar de todo esto, este modo de dominación demostró tener importantes potencialidades hegemónicas. Esta potencialidad hegemónica no se mide tanto en términos de su durabilidad, de su capacidad de permitir a

los gobiernos de turno ganar elecciones, etcétera. Se mide sobre todo en el hecho de que, sin violar las condiciones democráticas, esa hegemonía haya podido enmarcar la imposición de la profunda reestructuración capitalista que tuvo lugar en la Argentina de los noventa. Esto era hegemonía. Hegemonía no era simplemente ganar elecciones, era seguir ganando elecciones cuando alguien estaba haciendo lo que estaba haciendo Menem, es decir, semejante reestructuración capitalista.

Las transformaciones impulsadas por el menemismo, en verdad, retomaron una reestructuración del capitalismo argentino que ya venía de la dictadura, de los años setenta, para profundizarla radicalmente. La orientación hacia una economía centrada en una acumulación encabezada por la producción y exportación de *commodities* de bajo valor agregado, acompañada por una serie de sectores también reconvertidos del resto de la economía, de los servicios, del comercio, de las finanzas, etcétera. Y, por supuesto, la reforma del Estado, que acompañó esta reestructuración del capital.

Después tuvimos la crisis del 2001. La crisis del 2001, como resultado del proceso del ascenso de las luchas sociales en contra del neoliberalismo que se inició a mediados de los noventa y que culminó en las jornadas de fines de 2001, y que condujo a la caída del gobierno aliancista, de la convertibilidad y de la hegemonía menemista en su conjunto, la crisis del neoliberalismo en la Argentina. Esta crisis puso de manifiesto un límite a esa potencialidad hegemónica que había tenido el neoliberalismo. La clave de este límite estuvo en el carácter “dualizante” de la estructura económica y social que implicó imposición de esa reestructuración capitalista que, literalmente, dejaba a una parte de la población afuera. Este límite a la capacidad de construcción hegemónica se puso de manifiesto en la crisis de 2001, por cierto, pero esto no niega esa potencialidad hegemónica previa del neoliberalismo ni implica que los éxitos que había alcanzado ese proceso reestructuración de los noventa se revirtieran automáticamente. Esta reestructuración estableció las características fundamentales del modo de acumulación que seguiría vigente durante la década siguiente.

Sobre la crisis del 2001 quiero agregar un solo aspecto más que también es relevante para entender lo que vendría después. Se trata de que, aun cuando fue una crisis a la vez económica y política, una crisis de la acumulación y la dominación, como toda gran crisis generalizada, e incluso cuando en términos económicos quizás haya sido la crisis más severa sufrida por el capitalismo argentino en el siglo xx, resultó todavía más profunda

en términos políticos. Creo que, como crisis de la dominación, fue aún más severa que como crisis de la acumulación. Creo que ya había algunos indicadores de esto en el 2001. Pero se puso en evidencia con mayor claridad después, durante la salida de la crisis, en el sentido de que la recuperación económica resultó mucho más sencilla y más rápida, siempre comparativamente hablando, que la recomposición política. La recomposición política resultó en los hechos una tarea mucho más compleja que la recuperación económica. Esto es una suerte de “indicador retrospectivo” de la severidad que había caracterizado a la crisis política.

Esta dificultosa recomposición política, que llevó varios años, se inició durante el duhaldismo y concluyó durante el primer kirchnerismo. Voy a emplear aquí el término “kirchnerismo” genéricamente, como en otras ocasiones, para referirme a este proceso de recomposición de la acumulación y la dominación capitalista en la Argentina posneoliberal, a la restauración del orden después de la insurrección de fines de 2001, proceso que abarca aproximadamente la Presidencia de Duhalde y la primera Presidencia de Kirchner.¹ Estoy diferenciando implícitamente entre dos períodos dentro del kirchnerismo, con el enfrentamiento entre el gobierno y la burguesía agraria de 2008-2009 y la resultante crisis política como punto de inflexión entre ambos. La característica general de este proceso de recomposición y lo identificaría coloquialmente como una suerte de “conversión de la necesidad en virtud”, es decir, de conversión del derrumbe del neoliberalismo en un presunto “nuevo modelo” posneoliberal, signado, sin embargo, de principio a fin por el derrumbe del “modelo neoliberal” anterior.

Aclaro que soy bastante escéptico con el manejo que suele hacerse en ámbitos académicos de conceptos como este de “modelo”, modelos que muchas veces existen más en los papers de la academia que en las acciones efectivas de los hacedores de políticas públicas. Estos hacedores de políticas públicas suelen moverse más pragmáticamente, por ensayo y error, convirtiendo necesidades en virtudes, antes que orientados de manera racional por modelos, estrategias a largo plazo, proyectos de país y otras cosas semejantes. La conversión de la necesidad en virtud, entonces, es algo bastante generalizado en las políticas públicas. Pero quizás esta conversión resulte en especial intensa o manifiesta durante este proceso de recomposición que siguió a la crisis de 2001, debido a las condiciones en las cuales se desarrolló. Solo para ilustrar con ejemplos, recordemos que la imposibilidad de

1 Para un análisis mucho más exhaustivo de este proceso remito a Alberto Bonnet, *La insurrección como restauración. El kirchnerismo 2002-2015*, Buenos Aires, Prometeo, 2015.

pagar la deuda externa se convirtió en una suerte de declaración de independencia nacional en boca de Rodríguez Saa. Recordemos que el derrumbe de la convertibilidad, la imposibilidad de sostener la convertibilidad, se convirtió en nuevo régimen de tipo de cambio competitivo que sustentaría un nuevo modelo productivo, en boca de Duhalde, después de la devaluación forzada. Y así sucesivamente. A esto me refiero cuando hablo de una “conversión de la necesidad en virtud” durante el proceso de recomposición pos-2001.

Ahora bien, debido a la profundidad de la crisis política, la restauración del orden político requirió profundas transformaciones respecto del modo de dominación neoliberal heredado de los noventa, transformaciones que se sustentaron, sin embargo, sobre la continuidad del modo de acumulación igualmente heredado de los noventa. La característica distintiva del nuevo modo de dominación resultante de esas transformaciones fue un reemplazo de ese mecanismo de disciplinamiento ciego de mercado, que mencioné y asocié antes con el neoliberalismo, por un arbitraje mucho más activo del Estado, que podríamos denominar “neopopulista”. Un papel mucho más activo del Estado en el arbitraje entre los intereses de las diversas clases y fracciones de clases. Doy apenas un ejemplo para ilustrarlo. Disciplina de mercado es el decreto de Cavallo de 1991 que encadenó los aumentos de salarios a los aumentos en la productividad, mera correa de transmisión de los imperativos del mercado mundial sobre las negociaciones salariales. Arbitraje del Estado es la negociación colectiva tripartita, los topes, las componendas con la burocracia sindical, vigentes desde 2003.

Y lo mismo vale para otros ámbitos de intervención del Estado.

El indicador por excelencia de este reemplazo de la disciplina de mercado por el arbitraje del Estado es el propio retorno de la inflación, del modo inflacionario de desenvolvimiento de la puja de intereses entre clases y entre fracciones de clases, así como las políticas antiinflacionarias implementadas por el gobierno, desde la propia intervención del INDEC hasta los controles de precio, el cepo cambiario, los controles de las importaciones, etcétera. Tuvo lugar así un reemplazo de la disciplina de mercado, que se había derrumbado en 2001, por una suerte de policía sobre los propios agentes del mercado. Así, mientras Roque Fernández se limitaba a sentenciar que los empresarios ineficientes iban a desaparecer, Moreno daba puñetazos en la mesa para que bajaran los precios.

Retomando el tema de la hegemonía, también son bastante claros los límites de cualquier intento de construcción de una hegemonía neopopulista

dentro de este nuevo modo de dominación política. Y acaso más evidentes aún que en el caso de la hegemonía neoliberal. Estos límites respondieron en gran medida, precisamente, a que la emergencia de este nuevo modo de dominación se sustentó sobre la continuidad e incluso la consolidación del modo de acumulación preexistente. No se trata, nuevamente, de un asunto de “modelos económicos”. ¿Qué incentivo podían tener los hacedores de políticas públicas, dentro de este proceso de restauración del orden, para modificar el modo de funcionamiento de una economía que estaba creciendo a “tasas chinas”? Ninguno. Lo más razonable, para ellos, era recuperar cierta capacidad de arbitraje del Estado sobre el destino del excedente económico, realizar concesiones si fuera necesario, y restaurar el orden político sobre este mismo orden económico heredado.

El límite fundamental que implicaba esta convivencia de un nuevo modo de dominación con la continuidad del modo de acumulación era, naturalmente, la fuerte dependencia de la legitimidad política respecto de la bonanza económica.

La base material fundamental del consenso alrededor de este modo de dominación política fue, por una parte, la recuperación de los niveles de empleo y en alguna medida de los salarios al compás de la bonanza económica y, por otra parte, las políticas de “inclusión social”. La propia expresión “inclusión social” es reveladora en este sentido: se trataba de “incluir” a los excluidos (o “inempleables”, para usar la terminología del Ministerio de Desarrollo Social) dentro del orden existente, no se trataba de modificar este orden. La distancia que existe entre esta “inclusión social” y la vieja “justicia social”, dicho sea de paso, es la misma que existe entre este “neopopulismo” y el populismo clásico. Y esta distancia no solo es grande, sino también insalvable: ¿quién podía pensar en volver a la industrialización sustitutiva y al *fifty-fifty*, en las condiciones del capitalismo contemporáneo?

La dinámica del segundo kirchnerismo, del kirchnerismo reinventado después del enfrentamiento del gobierno de Fernández de Kirchner con la burguesía agraria de 2008-2009 y la consecuente crisis política, es el desenvolvimiento creciente de esta contradicción que estoy marcando entre las condiciones de la acumulación y la dominación. Es significativo, en este sentido, que el conflicto de las retenciones haya sido precisamente un conflicto alrededor del arbitraje del Estado sobre el excedente, en un contexto en el que aquella bonanza económica y, por consiguiente, el excedente a arbitrar, comenzaban a agotarse. Esta contradicción signó la inestabilidad

política, la imposibilidad de consolidación de una nueva hegemonía, una vez restaurado el orden político.

Y cierro con esto para hacer una referencia a la actualidad. Es evidente que estas contradicciones atravesaron crecientemente a todo el segundo kirchnerismo y condujeron a su crisis. Pero también es evidente la contrapartida de esto. A saber, que ese modo de dominación política consolidó una relación de fuerzas entre clases que fue y sigue siendo un problema para la propia burguesía. Este es el desafío que enfrenta la burguesía hoy o, más bien, que viene enfrentando durante el último quinquenio: el desafío de cómo desarmar ese modo de dominación política y esta relación de fuerzas. La cuestión actual del ajuste debe entenderse en este contexto. El problema es cómo desarmar este modo de dominación política, que les sirvió para recomponer la dominación en su momento, pero que ya no les sirve más. Y cómo desarmarlo cuando la relación de fuerzas subyacente es adversa al desarme, cuando del ajuste casi ni puede hablarse, cuando el ajuste suscita enseguida la resistencia. La necesidad de desarmar este modo de dominación y la imposibilidad de hacerlo signó al segundo kirchnerismo. La necesidad de desarmarlo ya se puso de manifiesto claramente hacia 2010-2011, la imposibilidad de hacerlo se puso de manifiesto a su vez en sucesivas postergaciones y, en definitiva, en la “fuga hacia adelante” del segundo kirchnerismo. El 2015 fue, en este sentido, la culminación de un proceso que venía desde la crisis del 2008-2009 y que ya se había puesto de manifiesto claramente en las elecciones de 2011. Pero ese mismo desafío es el que enfrenta el macrismo en nuestros días. Y no es muy evidente que vaya a salir airoso.

Insignias notorias de la gran tradición de los pensamientos de la emancipación, los conceptos de revolución y de democracia pudieron pensarse en América Latina, durante los tres primeros lustros de este siglo, en sus diversas y auspiciosas combinaciones. En ese clima de ideas, tan distinto del actual, se puso en marcha años atrás el **Programa Regional Democracias en Revolución & Revoluciones en Democracia**, cuyos grandes motivos no hay ninguna razón para abandonar y cuyo capítulo argentino se complace en presentar sus resultados por medio de esta *serie* de libros colectivos.

¿Cómo describir, evaluar y establecer una suerte de balance del ciclo histórico iniciado en la Argentina a partir de 2001? Economistas y politólogos destacados de nuestro medio dieron un debate abierto sobre este tema y como resultado se reunieron en este volumen seis trabajos que dialogan y discuten entre sí. En ese debate se sostiene que la relación entre economía y política bajo instituciones democráticas debe ser investigada desde la perspectiva de la confrontación entre proyectos y fuerzas que pugnan por establecer un orden hegemónico, que pretenden viabilizar un determinado proyecto de sociedad y constituir un bloque social. Esta articulación es contingente en una sociedad en la que existen alta fragmentación social y vulnerabilidad de los sectores populares, heredada del período neoliberal.

Universidad Nacional
de General Sarmiento



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
LA UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO



Libro
Universitario
Argentino

